



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS



Tengo el honor de dar traslado a esa Cámara del escrito de remisión y la documentación relativa al Proyecto de Ley de regulación del judio.

Madrid, 4 de febrero de 2011

Fdo. Electrónicamente por:

José Luis de Francisco Herrero

**SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES Y PARLAMENTARIOS**

→ No válido sin Huella Digital Adjunta

SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

En cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, en su reunión del día 4 de febrero de 2011, tengo el honor de remitir a V.E., en nombre del Gobierno, el Proyecto de Ley de regulación del juego, acompañado de la siguiente documentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución:

- Memoria del análisis de impacto normativo.

Asimismo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Gobierno ha acordado solicitar de las Cortes Generales la tramitación de dicho Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia, adjuntándose, a tal efecto, copia compulsada del Acuerdo de Consejo de Ministros de trámite parlamentario de urgencia.

Madrid, 4 de febrero de 2011

EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA,

Ramón Jáuregui Atondo



EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS





PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO

ÍNDICE

TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

- Artículo 1. Objeto.
- Artículo 2. Ámbito de aplicación.
- Artículo 3. Definiciones.
- Artículo 4. Loterías.

TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES.

- Artículo 5. Regulación de los juegos.
- Artículo 6. Prohibiciones objetivas y subjetivas.
- Artículo 7. Publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego.
- Artículo 8. Gestión responsable del juego y políticas de juego responsables.

TÍTULO III. TÍTULOS HABILITANTES.

- Artículo 9. Sometimiento de la actividad del juego a la previa obtención de título habilitante.
- Artículo 10. Licencias generales.
- Artículo 11. Licencias singulares.
- Artículo 12. Autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional.

TÍTULO IV. CONTROL DE LA ACTIVIDAD.

Capítulo I. Operadores.

- Artículo 13. Los operadores.
- Artículo 14. Garantías exigibles a los operadores.

Capítulo II. Participantes.

- Artículo 15. Derechos de los participantes en los juegos.





Capítulo III. Homologación de los sistemas técnicos de juego.

Artículo 16. Homologación de los sistemas técnicos de juego.

Artículo 17. Requisitos de los sistemas técnicos.

Artículo 18. Unidad Central de Juegos.

TÍTULO V. LA ADMINISTRACIÓN DEL JUEGO.

Capítulo I. El Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 19. Competencias.

Capítulo II. La Comisión Nacional del Juego.

Artículo 20. Objeto y naturaleza jurídica.

Artículo 21. Funciones.

Artículo 22. Los Registros del sector del juego.

Artículo 23. Competencia normativa.

Artículo 24. Inspección y control.

Artículo 25. Arbitraje de la Comisión Nacional del Juego.

Artículo 26. El Consejo. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional del Juego.

Artículo 27. El Presidente de la Comisión Nacional del Juego.

Artículo 28. Funciones de los miembros del Consejo.

Artículo 29. Causas de cese en el ejercicio del cargo.

Artículo 30. Régimen de contratación.

Artículo 31. Régimen de personal.

Artículo 32. Régimen presupuestario y de control.

Artículo 33. Régimen Económico-Financiero y recursos de la Comisión Nacional del Juego.

Capítulo III. El Consejo de Políticas de Juego.

Artículo 34. El Consejo de Políticas de Juego.

Artículo 35. Competencias.

TÍTULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 36. Competencia.

Artículo 37. Infracciones.

Artículo 38. Sujetos infractores.

Artículo 39. Infracciones muy graves.

Artículo 40. Infracciones graves.

Artículo 41. Infracciones leves.

Artículo 42. Sanciones administrativas.

Artículo 43. Prescripción.

Artículo 44. Procedimiento sancionador.





Artículo 45. Régimen de recursos.

Artículo 46. Medidas cautelares.

Artículo 47. Medidas en relación con los prestadores de servicios de intermediación.

TÍTULO VII. RÉGIMEN FISCAL.

Artículo 48. Impuesto sobre actividades de juego.

Artículo 49. Tasa por la gestión administrativa del juego.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

PRIMERA. Reserva de la actividad del juego de Loterías.

SEGUNDA. Régimen jurídico específico aplicable a la ONCE en materia de juego.

TERCERA. Asignación financiera a la ONCE y de las Apuestas Deportivas del Estado.

CUARTA. Participación de las Comunidades Autónomas en la aprobación de nuevas modalidades de juego.

QUINTA. Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

SEXTA. Régimen de participación en la recaudación de las Apuestas Deportivas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIMERA. Inicio de actividades de la Comisión Nacional del Juego.

SEGUNDA. Títulos habilitantes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado

TERCERA. Normativa de los juegos.

CUARTA. Régimen transitorio para los puntos de venta de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

QUINTA. Primer mandato de los Consejeros de la Comisión Nacional del Juego.

SEXTA. Régimen transitorio de la cesión del impuesto.

SÉPTIMA. Convalidaciones y homologaciones de las Comunidades Autónomas.

OCTAVA. Régimen transitorio de los patrocinios deportivos sobre el juego.





DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIONES FINALES.

- PRIMERA. Título competencial.
- SEGUNDA. Facultad de desarrollo.
- TERCERA. Extinción de determinados Organismos Públicos.
- CUARTA. Actualización del importe de las sanciones.
- QUINTA. Modificación de las tasas sobre el juego.
- SEXTA. Modificación de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- SÉPTIMA. Exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto General Indirecto Canario y referencia a los impuestos directos del Estado.
- OCTAVA. Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Desde la despenalización del juego en el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas, y debido fundamentalmente a la irrupción de los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego interactivos a través de Internet, ha cambiado de forma sustancial, tanto en España como en otros países de su entorno, la concepción tradicional del juego.

Durante muchos años, el régimen jurídico del juego ha sufrido pocos cambios. Sin embargo, recientemente, como consecuencia de la citada irrupción de las apuestas y juegos a través de Internet y al verse superados los límites territoriales de las relaciones comerciales tradicionales, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado la necesidad de establecer una oferta dimensionada de juego.

En paralelo a este proceso de cambio, han aparecido nuevos operadores en el mercado del juego para los que la normativa vigente no ofrece una respuesta regulatoria adecuada.





La carencia de los instrumentos normativos adecuados para dar respuesta a los interrogantes creados ante la nueva situación del mercado, ha generado en el sector del juego la necesidad de establecer nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a operadores y participantes en los diferentes juegos, sin olvidar la imprescindible protección de los menores de edad, de aquellas personas que hubieran solicitado voluntariamente la no participación, así como la protección del orden público y la prevención de los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

II

El avance en los servicios de comunicación y, como consecuencia de su aplicación a las actividades de juego, la desvinculación de este tipo de actividades del territorio, ha traído consigo la necesidad de iniciar un nuevo camino en la regulación del sector del juego asegurando mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección social de los menores y de los participantes en los juegos, al tiempo que se pretenden alcanzar otras importantes finalidades como son la prevención de actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales, y todo ello a través de una oferta dimensionada del juego, de una regulación de la práctica de aquellos juegos que puedan ser autorizados, así como del control público del sector.

Las aludidas finalidades, así como la necesidad de dotar al sector del juego de una regulación adecuada, ha tenido su reflejo en distintas iniciativas parlamentarias y en mandatos al Gobierno como el establecido, en el ámbito nacional, en la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y, en el ámbito comunitario, en la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2009 sobre la integridad de los juegos de azar en línea.

En definitiva, con el más absoluto respeto al marco competencial definido por la Constitución y los Estatutos de autonomía, resulta de todo punto insoslayable la necesidad de dotar de un nuevo marco jurídico a las actividades de explotación y gestión de juegos de ámbito estatal y, particularmente, a aquellos juegos que se practican a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y en los que los medios presenciales tienen un carácter accesorio.

El desarrollo de un marco normativo que responda a las necesidades del sector del juego ha de realizarse sin perjuicio del reconocimiento pleno de las competencias en materia de juego que los Estatutos de autonomía atribuyen a las respectivas Comunidades entre las que se incluyen en algunos casos la capacidad de éstas para colaborar en el ejercicio de competencias estatales en relación con las actividades de juego. Esta circunstancia ha hecho preciso el diseño de procedimientos y mecanismos asimétricos que faciliten la necesaria colaboración y coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias estatales en materia de juego.



III

En cumplimiento y desarrollo del mandato previsto en la ya citada disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la



Información y a los efectos de controlar las actividades de juego de ámbito estatal, especialmente si se realizan a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, ha sido necesario establecer un sistema de planificación y acceso al desarrollo de la actividad, determinar las competencias estatales en materia de regulación y control, y definir un régimen de infracciones y sanciones que garantice la efectividad del marco regulatorio.

Estos objetivos constituyen, en consecuencia, una de las finalidades esenciales de esta ley que ha de ser la norma sectorial de referencia en materia de explotación de juegos a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos en el ámbito estatal, procurando, al mismo tiempo, la coordinación o integración de la regulación que ahora se aprueba con el marco normativo general de la actividad de juego en nuestro país y con otras normas sectoriales sobre las que esta ley pueda tener incidencia, tales como, a título de ejemplo, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa complementaria, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Esta ley, sobre la base de la existencia de una oferta dimensionada, pretende regular la forma de acceder a la explotación de las actividades de juego de ámbito nacional, permitiendo asimismo la apertura del sector a una pluralidad de operadores de juego. Se trata, no obstante, de una apertura del sector que debe ser controlada al objeto de garantizar la tutela de todos los intereses involucrados y preservar el orden público con pleno respeto a los principios inspiradores del Derecho Comunitario.

El gran volumen de juego asociado a las loterías, así como la posibilidad de que el carácter de documentos de pago al portador de sus boletos y billetes pueda ser empleado como instrumento de blanqueo de capitales, requiere una reserva de esta actividad a determinados operadores, públicos o privados, que han de quedar sujetos a un estricto control público, asegurándose de este modo la protección de los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad, evitando asimismo los efectos perniciosos del juego sobre los consumidores.

En este sentido, se hace plenamente necesario mantener la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), como operadores de juego que vienen explotando de forma controlada hasta la fecha estas loterías.

La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado continuará sometida a un régimen de control público de su actividad dado el gran volumen de juego gestionado por esta y su extensa red comercial, de gran raigambre en la sociedad española desde hace más de 250 años. Por otra parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que desde 1938 se ha consolidado en España como una institución social singular en el objetivo de atención a las personas con discapacidad, seguirá manteniendo su singularidad jurídica en materia de juego en las actividades sujetas a reserva, tal y como se establece en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta ley.

Con esta finalidad, se encomienda al Ministerio de Economía y Hacienda a la Comisión Nacional del Juego, el establecimiento de los procedimientos de autorizaciones y la adopción de aquellas medidas que permitan el seguimiento y control de los operadores que realicen actividades de Juego sujetas a reserva en virtud de esta ley y del control del





cumplimiento, por parte de éstos, de las condiciones que se establezcan, en especial, en relación con la protección del orden público y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

IV

Desde el máximo respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, esta ley se fundamenta en los números 6, 11, 13, 14 y 21 del apartado primero del artículo 149 de la Constitución Española y en la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, manifestada en numerosas sentencias, entre las que cabe destacar, la número 163/1994, de 26 de mayo, que declara la existencia de una competencia estatal en materia de juego que ha de ser ejercida por el Estado en nombre del interés general, sin perjuicio de las competencias que en materia de juego tienen reconocidas las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de autonomía

La regulación de los juegos de ámbito estatal se ha plasmado de conformidad con el mandato recogido en el apartado sexto de la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Las competencias estatales en materia de juego han de ser entendidas, no obstante, sin perjuicio del reconocimiento pleno de las competencias que, en esta materia atribuyen los Estatutos de autonomía a las respectivas Comunidades Autónomas lo que ha hecho preciso el diseño de procedimientos y mecanismos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. A estos efectos, se crea el Consejo de Políticas de Juego, como órgano colegiado que asegurará la participación de las Comunidades Autónomas en la fijación de los principios de la normativa de los juegos y de las medidas de protección a los menores, personas dependientes. En todo caso, a través del Consejo de Políticas de Juego se coordinará la actuación del Estado y Comunidades Autónomas en materia de otorgamiento de licencias.

Esta ley establece la regulación de las actividades de juego que se realizan a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y en las que los medios presenciales deberán tener un carácter accesorio, salvo las actividades presenciales de juego sujetas a reserva desarrolladas por las entidades designadas por la ley que, por su naturaleza, son exclusivamente de competencia estatal.

Con la finalidad de respetar íntegramente las competencias de las Comunidades Autónomas sobre el juego presencial, la ley ha introducido la obligación de que las Comunidades Autónomas emitan preceptivamente un informe sobre las solicitudes de títulos habilitantes que puedan afectar a su territorio. La concesión de cualquier título habilitante exigirá, para la instalación o apertura de locales presenciales abiertos al público o de equipos que permitan la participación de los juegos, autorización administrativa de la Comunidad Autónoma, que se otorgará de acuerdo con las políticas propias de dimensionamiento de juego de cada una de ellas.





V

La presente ley se divide en siete títulos, con cuarenta y nueve artículos, cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

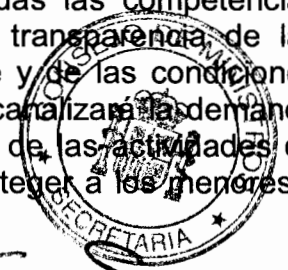
En el Título I, "Objeto y ámbito de aplicación", se regula el objeto y ámbito de aplicación de la ley, tanto desde una perspectiva objetiva (actividad regulada) como territorial (ámbito de la actividad). De esta forma, el alcance de esta norma se extiende a toda actividad de organización, explotación y desarrollo de actividades de juego de ámbito estatal realizadas a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales tienen carácter accesorio, así como a la actividad publicitaria conectada con la misma, siempre que tales actividades se dirijan a todo el territorio del Estado, adoptando el criterio de distribución competencial establecido en otras normas sectoriales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información. Asimismo, se incorporan las diferentes definiciones de juegos, incluidos los de carácter esporádico, y se establece la reserva y el régimen de control de la actividad de loterías.

En el Título II, "Disposiciones Generales", se recogen los requisitos de los juegos, así como las prohibiciones objetivas y subjetivas a las actividades objeto de regulación, previéndose la creación o adecuación de los instrumentos administrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones subjetivas. Igualmente, se regula la publicidad del juego al amparo de las competencias del Estado previstas en el número 6, del apartado primero del artículo 149 de la Constitución Española, singularmente en lo que se refiere a la protección de la juventud y de la infancia, garantizada en el apartado cuarto del artículo 20 de la Constitución Española. Además, se recogen los principios y prácticas a adoptar con objeto de proteger el orden público, garantizando la integridad del juego, así como previniendo y mitigando la participación desordenada en los juegos de azar y los efectos nocivos que pudiere provocar, optimizando simultáneamente los beneficios para la Sociedad.

En el Título III, "Títulos Habilitantes", se establecen las características de las diferentes clases de títulos habilitantes, licencias y autorizaciones, y el régimen de autorización aplicable a los operadores como explotadores de juegos, previendo un sistema de adjudicación respetuoso con los principios generales del Derecho Comunitario.

En el Título IV, "Control de la actividad", se establecen los requisitos técnicos mínimos, susceptibles de mayor concreción mediante un posterior desarrollo reglamentario específico, que deberán cumplir los equipos y sistemas técnicos que sirvan como soporte de la actividad de juegos autorizados.

En el Título V, "La Administración del Juego", se establecen las competencias que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda en materia de juego. Se crea un órgano regulador, La Comisión Nacional del Juego, al que se le atribuyen todas las competencias necesarias para velar y asegurar la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego, así como el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones establecidas para su explotación. Además, este órgano regulador único canalizará la demanda dimensionando la oferta de actividades de juego, evitando la explotación de las actividades de juego con fines fraudulentos y estableciendo el marco apropiado para proteger a los menores y





prevenir el desarrollo de fenómenos de dependencia. Por último, se establece el Consejo de Políticas de Juego como el órgano de participación de las Comunidades Autónomas.

En el Título VI, "Régimen Sancionador", se establece el régimen de infracciones y sanciones en relación con las actividades objeto de esta ley, así como el procedimiento sancionador, incluyendo previsiones para poder actuar contra el juego no autorizado por medio del bloqueo de la actividad que pueda realizarse a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.

Y finalmente, en el Título VII, "Régimen Fiscal", se determina, de acuerdo con las previsiones establecidas en la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, el régimen impositivo aplicable al desarrollo de las actividades de juego reguladas en esta ley, sin perjuicio del mantenimiento de lo establecido en los artículos 36 y siguientes del Decreto 3059/1966, de 1 diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de Tasas Fiscales y en el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, que continuarán en vigor en lo que se refiere al gravamen cedido en su ámbito competencial.

Este nuevo impuesto, en el ámbito estatal, grava las operaciones de juego, así como a las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, aunque no sean estrictamente juego.

Además de lo anterior, se regula la participación de las Comunidades Autónomas en el nuevo impuesto del juego mediante la cesión de la recaudación obtenida por el gravamen correspondiente a los ingresos por el juego de los residentes en cada Comunidad, reservándose el Estado lo recaudado por cuenta de los jugadores no residentes en España y por lo que corresponda a las apuestas mutuas deportivas estatales y las apuestas mutuas hípcas estatales.

El nuevo impuesto, como se ha dicho, no afecta a las tasas vigentes sobre el juego, siendo incompatible con las mismas, que siguen siendo gravámenes cedidos a las Comunidades Autónomas en su totalidad.

Por último, se establece una tasa fiscal sobre las actividades y servicios prestados a los operadores por la Comisión Nacional del Juego.

TÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN



Artículo 1. Objeto.

El objeto de esta ley es la regulación de la actividad de juego, en sus distintas modalidades, que se desarrolle en el ámbito del Estado con el fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos.



La ley regula, en particular, la actividad de juego a que se refiere el párrafo anterior cuando se realice a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales deberán tener un carácter accesorio, salvo para los juegos desarrollados por las entidades designadas por esta ley para la realización de actividades sujetas a reserva.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Dentro del objeto definido en el artículo anterior, se incluyen en el ámbito de aplicación de esta ley las siguientes actividades de juego cuando la actividad desarrollada tenga ámbito estatal:

- a) Las actividades de juego de loterías, apuestas y otras cualesquiera, en las que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma, sobre resultados futuros e inciertos, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar.
- b) Las rifas y concursos, en los que la participación se realiza mediante una contraprestación económica.
- c) Los juegos de carácter ocasional, que se diferencian del resto de los juegos previstos en los apartados anteriores por su carácter esporádico.
- d) Las actividades de juego transfronterizas, esto es, las realizadas por las personas físicas o jurídicas radicadas fuera de España que organicen u ofrezcan actividades de juegos a residentes en España.

Se incluyen asimismo en el ámbito de aplicación de esta ley las actividades de publicidad, promoción y patrocinio relativas a las actividades de juego relacionadas en el presente apartado.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

- a) Los juegos o competiciones de puro ocio, pasatiempo o recreo que constituyan usos sociales y se desarrollen en el ámbito estatal, siempre que éstas no produzcan transferencias económicamente evaluables, salvo el precio por la utilización de los medios precisos para su desarrollo y cuando éste no constituya en medida alguna beneficio económico para el promotor o los operadores.
- b) Las actividades de juego realizadas a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuyo ámbito no sea estatal.
- c) Las combinaciones aleatorias con fines promocionales o publicitarios, sin perjuicio de lo establecido en el Título VII de esta ley.





Artículo 3. Definiciones.

A efectos de esta ley, los términos que en ella se emplean tendrán el sentido que se establece en el presente artículo.

- a) *Juego*. Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego.
- b) *Loterías*. Se entiende por loterías las actividades de juego en las que se otorgan premios en los casos en que el número o combinación de números o signos, expresados en el billete, boleto o su equivalente electrónico, coinciden en todo o en parte con el determinado mediante un sorteo o evento celebrado en una fecha previamente determinada o en un programa previo, en el caso de las instantáneas o presorteadas. Las loterías se comercializarán en billetes, boletos o cualquier otra forma de participación cuyo soporte sea material, informático, telemático, telefónico o interactivo.
- c) *Apuestas*. Se entiende por apuesta, cualquiera que sea su modalidad, aquella actividad de juego en la que se arriesgan cantidades de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado cuyo desenlace es incierto y ajeno a los participantes, determinándose la cuantía del premio que se otorga en función de las cantidades arriesgadas u otros factores fijados previamente en la regulación de la concreta modalidad de apuesta.

En función del acontecimiento sobre cuyo resultado se realiza la apuesta, ésta puede ser:

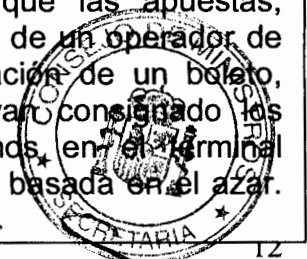
1. *Apuesta deportiva*: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios eventos deportivos, incluidos en los programas previamente establecidos por la entidad organizadora, o sobre hechos o actividades deportivas que formen parte o se desarrollen en el marco de tales eventos o competiciones por el operador de juego.
2. *Apuesta hípica*: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de una o varias carreras de caballos incluidas en los programas previamente establecidos por la entidad organizadora.
3. *Otras apuestas*: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios eventos distintos de los anteriores incluidos en los programas previamente establecidos por el operador de juego.

Según la organización y distribución de las sumas apostadas, la apuesta puede ser:





1. **Apuesta mutua:** es aquella en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre aquellos apostantes que hubieran acertado el resultado a que se refiera la apuesta.
 2. **Apuesta de contrapartida:** es aquella en la que el apostante apuesta contra un operador de juego, siendo el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los pronósticos ganadores por el coeficiente que el operador haya validado previamente para los mismos.
 3. **Apuesta cruzada:** es aquella en que un operador actúa como intermediario y garante de las cantidades apostadas entre terceros, detrayendo las cantidades o porcentajes que previamente el operador hubiera fijado.
- d) **Rifas.** Se entiende por rifa aquella modalidad de juego consistente en la adjudicación de uno o varios premios mediante la celebración de un sorteo o selección en la que intervenga el azar, entre los adquirientes de billetes, papeletas u otros documentos o soportes de participación, diferenciados entre si, ya sean de carácter material, informático, telemático o interactivo, en una fecha previamente determinada, y siempre que para participar sea preciso realizar una aportación económica. El objeto de la rifa puede ser un bien mueble, inmueble, semoviente o derechos ligados a los mismos, siempre que no sean premios dinerarios.
- e) **Concursos.** Se entiende por concursos aquella modalidad de juego en la que su oferta, desarrollo y resolución se desarrolla por un medio de comunicación ya sea de televisión, radio, Internet u otro, siempre que la actividad de juego esté conexas o subordinada a la actividad principal. En esta modalidad de juego para tener derecho a la obtención de un premio, en metálico o en especie, la participación se realiza, bien directamente mediante un desembolso económico, o bien mediante llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional, siendo indiferente el hecho de que en la adjudicación de los premios intervenga, no solamente el azar, sino también la superación de pruebas de competición o de conocimiento o destreza.
- A los efectos de la presente definición, no se entenderán por concurso aquellos programas en las que aún existiendo premio el concursante no realice ningún tipo de desembolso económico para participar, ya sea directamente o por medio de llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional.
- f) **Otros Juegos.** Son todos aquellos juegos que no tienen cabida en las definiciones anteriores, en los que exista un componente de aleatoriedad o azar y en los que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables.
- g) **Juegos a través de medios presenciales.** Son aquellos en los que las apuestas, pronósticos o combinaciones deben formularse en un establecimiento de un operador de juego a través de un terminal en línea, bien mediante la presentación de un boleto, octavilla o un documento establecido al efecto en el que se hayan consignado los pronósticos, combinaciones o apuestas, bien tecleando los mismos en el terminal correspondiente, o bien mediante su solicitud automática al terminal, basada en el azar.





Cualquiera de las fórmulas antes citadas serán transmitidas a un sistema central y, a continuación, el terminal expedirá uno o varios resguardos en los que constarán, al menos, los siguientes datos: tipo de juego, pronósticos efectuados, fecha de la jornada, evento o período en el que participa, número de apuestas o combinaciones jugadas y números de control. Además del resguardo o resguardos referidos, existirá un resguardo único expedido por el terminal ubicado en el punto de venta autorizado de que se trate, en el que constarán, al menos, los datos antes citados, y que constituye el único instrumento válido para solicitar el pago de premios y la única prueba de participación en los concursos.

- h) *Juego por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.* Son aquellos en los que se emplea cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como televisión, Internet, telefonía fija y móvil o cualesquiera otras, o comunicación interactiva, ya sea ésta en tiempo real o en diferido.
- i) *Combinaciones aleatorias con fines publicitarios y promocionales.* Se entienden por tales aquellos sorteos que, con finalidad exclusivamente publicitaria o de promoción de un producto o servicio, y teniendo como única contraprestación el consumo del producto o servicio, sin sobreprecio ni tarificación adicional alguna, ofrecen premios en metálico, especie o servicios, exigiendo, en su caso, la condición de cliente de la entidad objeto de la publicidad o promoción.

Artículo 4. Loterías.

1. Las loterías de ámbito estatal quedarán reservadas a los operadores designados por la ley.

2. Corresponde al titular del Ministerio de Economía y Hacienda la autorización para la comercialización de loterías de ámbito estatal. La autorización fijará las condiciones de gestión de los juegos en:

- a) El porcentaje mínimo y máximo destinado a premios.
- b) Las condiciones y requisitos para la celebración de sorteos, cuando procedan y la fijación del número de los mismos.
- c) Los derechos de los participantes y los procedimientos de reclamación.
- d) Las condiciones en las que podrán realizar actividades de publicidad y patrocinio de las actividades autorizadas.
- e) Las medidas de protección a los menores, personas dependientes y para la prevención del fraude y del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los términos de los dispuesto en la Ley 10/2010 de 28 de abril.

3. En la explotación y comercialización de las loterías, los operadores autorizados cooperarán con el Estado en la erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del fraude y la criminalidad y en la evitación de los efectos perniciosos de los juegos.





4. Los operadores autorizados, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el artículo 8 de esta ley, notificarán a la Comisión Nacional del Juego un Plan de Medidas en el que se concreten los compromisos adicionales adquiridos por el operador en la gestión responsable del juego, la participación en la reparación de los efectos negativos del mismo y la contribución del operador autorizado a planes, proyectos o actuaciones en beneficio de la sociedad.

TÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5. Regulación de los juegos.

1. El Ministerio de Economía y Hacienda establecerá, por Orden Ministerial, la reglamentación básica para el desarrollo de cada juego o, en el caso de juegos esporádicos, las bases generales para la aprobación de su práctica o desarrollo.

2. El establecimiento de requisitos para el desarrollo de los juegos o su modificación, se entenderá, según corresponda, como autorización de nuevas modalidades de juegos o como modificación de las existentes.

3. Cualquier modalidad de juego no regulada se considerará prohibida.

4. La regulación o las bases preverán, dependiendo de la naturaleza del juego, los requisitos para evitar su acceso a los menores e incapacitados, evitando la utilización de imágenes, mensajes u objetos que puedan vulnerar, directa o indirectamente, la dignidad de las personas y los derechos y libertades fundamentales, así como cualquier forma posible de discriminación racial o sexual, de incitación a la violencia o de realización de actividades delictivas.

Artículo 6. Prohibiciones objetivas y subjetivas.

1. Queda prohibida toda actividad relacionada con la organización, explotación y desarrollo de los juegos objeto de esta ley que, por su naturaleza o por razón del objeto sobre el que versen:

- a) Atenten contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente.
- b) Se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas.





c) Reaigan sobre eventos prohibidos por la legislación vigente.

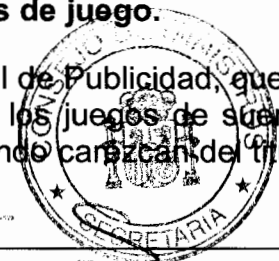
2. Desde un punto de vista subjetivo, se prohíbe la participación en los juegos objeto de esta ley a:

- a) Los menores de edad y los incapacitados legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que establezca la normativa civil.
- b) Las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme.
- c) Los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado, en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, con independencia de que la participación en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca de manera directa o indirecta, a través de terceras personas físicas o jurídicas.
- d) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.
- e) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.
- f) Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos.
- g) El Presidente, los consejeros y directores de la Comisión Nacional del Juego, así como a sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado y a todo el personal de la Comisión Nacional del Juego que tengan atribuidas funciones de inspección y control en materia de juego.
- h) Cualesquiera otras personas que una norma pueda establecer.

3. Con el fin de garantizar la efectividad de las anteriores prohibiciones subjetivas, la Comisión Nacional del Juego establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del juego y potencial perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para la efectividad de las mismas. Asimismo, creará el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, de ámbito estatal, y el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego.

Artículo 7. Publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego.

1. De conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, queda prohibida la publicidad, patrocinio o promoción, bajo cualquier forma, de los juegos de suerte, envite o azar y la publicidad o promoción de los operadores de juego, cuando carezcan del título





habilitante correspondiente para su práctica y que autorice a la realización de publicidad de juego o del operador que desarrolla esta actividad.

Se entenderá que el operador de juegos necesita título habilitante para todos aquellos programas emitidos en medios audiovisuales, publicaciones en medios de comunicación o páginas web en los que se desarrollen cualquier tipo de juego, ya sea total o parcialmente, incluidos aquellos en los que el medio para acceder a un premio consista en la utilización de servicios de tarificación adicional prestados a través de llamadas telefónicas o basados en el envío de mensajes, están sometidas, en lo que se refiere al ejercicio de actividades de juego, a autorización previa por parte de la Comisión Nacional del Juego.

2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que se incluirán en los respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria y sus límites y, en particular, respecto a:

- a) El envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, que sólo será posible si ha sido previamente autorizado por su destinatario, de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
- b) La inclusión de anuncios u otras modalidades publicitarias de los juegos en medios de comunicación.
- c) La actividad de patrocinio en acontecimientos deportivos que sean objeto de apuestas.
- d) La inserción de carteles publicitarios en los lugares en que se celebren acontecimientos que sean objeto de juego.
- e) El desarrollo de los concursos televisivos y las obligaciones de información sobre los requisitos esenciales del juego.
- f) Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente.

3. Cualquier entidad, agencia de publicidad, operador audiovisual, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información que difunda la publicidad y promoción directa o indirecta de juegos o de sus operadores, deberá requerir a quien solicite la inserción de los anuncios o reclamos publicitarios la tenencia del correspondiente título habilitante expedido por la Comisión Nacional del Juego que autorice a la realización de la publicidad solicitada, absteniéndose de su práctica si carece de ella. La Comisión Nacional del Juego expedirá certificación sobre los extremos antes citados, a requerimiento de los interesados en donde incluirá las limitaciones básicas para la emisión de la publicidad.

4. La Comisión Nacional del Juego en el ejercicio de la potestad administrativa de requerir el cese de la publicidad de las actividades de juego, se dirigirá a la entidad, agencia de publicidad, operador audiovisual, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información correspondiente indicándole motivadamente la infracción de la normativa aplicable.





La entidad, agencia de publicidad, operador audiovisual, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información deberá, en los dos días naturales siguientes a su recepción, comunicar el cumplimiento del requerimiento. En caso de que el mensaje publicitario cuente con un informe de consulta previa positivo emitido por un sistema de autorregulación publicitaria con el que la Comisión Nacional del Juego tenga un convenio de colaboración de los previstos en el punto 5 del artículo 24 de esta ley, se entenderá que se actuó de buena fe si se hubiese sujetado a dicho informe de consulta previa positivo, para el supuesto de actuación administrativa realizada en el marco de un expediente sancionador.

Artículo 8. Gestión responsable del juego y políticas de juego responsable.

1. La Gestión responsable del juego es el conjunto de principios y prácticas a adoptar con objeto de proteger el orden público garantizando la integridad del juego, así como previniendo y mitigando la participación desordenada en los juegos de azar y los efectos nocivos que pudiere provocar, optimizando simultáneamente los beneficios para la Sociedad.

2. El ejercicio de las actividades de juego se abordará desde una política integral de responsabilidad social corporativa que contemple el juego como un fenómeno complejo donde se han de combinar acciones preventivas, de sensibilización, intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos.

Las acciones preventivas se dirigirán a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas del juego, así como de los posibles efectos que una práctica no adecuada del juego puede producir.

Los operadores de juego deberán elaborar un plan de medidas en relación con la mitigación de los posibles efectos perjudiciales que pueda producir el juego sobre las personas e incorporarán las reglas básicas de política del juego responsable.

3. Los operadores habilitados para realizar actividades de juego deberán asumir como compromisos:

- a) Asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes, especialmente, las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- b) Asegurar la integridad y seguridad de los juegos, garantizando la participación, transparencia de los sorteos y eventos, del cálculo y del pago de premios y el uso profesional diligente de los fondos, en su más amplio sentido.
- c) Canalizar adecuadamente la demanda de participación.
- d) Reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos en riesgo. Esta reducción de riesgo incluye la lucha contra el juego ilegal y las actividades delictivas asociadas.
- e) Colaborar activamente de acuerdo con la normativa vigente, con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales.





- f) Proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, promocionando actitudes de juego moderado y responsable.
- g) Informar de acuerdo con la naturaleza y medios utilizados en cada juego de la prohibición de participar a los menores de edad o a las personas incluidas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego o en el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego.

4. Los operadores no podrán conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito o asistencia financiera a los participantes.

5. La Comisión Nacional del Juego verificará el cumplimiento por los operadores de su compromiso con la gestión de juego responsable y la implementación de prácticas adecuadas en todos los aspectos de sus actividades y de su red de ventas, sin perjuicio de las competencias de supervisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en materia de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establecidas por el artículo 45.4 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

TÍTULO III TÍTULOS HABILITANTES.

Artículo 9. Sometimiento de la actividad del juego a la previa obtención de título habilitante.

1. El ejercicio de las actividades no reservadas que son objeto de esta ley queda sometido a la previa obtención del correspondiente título habilitante, en los términos previstos en los artículos siguientes. De conformidad con esta ley son títulos habilitantes las licencias y autorizaciones de actividades de juego.

Las Comunidades Autónomas emitirán informe preceptivo sobre las solicitudes de títulos habilitantes formuladas ante la Comisión Nacional del Juego que puedan afectar a su territorio. A estos efectos, se considerará que las actividades de juego afectan a una Comunidad Autónoma, cuando los operadores de juego tengan en la misma su residencia, domicilio social o, en caso de no coincidir con éstos, el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

La instalación o apertura de locales presenciales abiertos al público o de equipos que permitan la participación en los juegos exigirá, en todo caso autorización administrativa de la Comunidad Autónoma, cuya legislación así lo requiera.

La Comisión Nacional del Juego comunicará a los órganos autonómicos competentes el otorgamiento de los títulos habilitantes de juego que afecten a su territorio. El mismo





procedimiento se seguirá en caso de modificación, transmisión, revocación y extinción de los títulos habilitantes, así como en los supuestos de sanción de las actividades sujetas a los mismos.

2. Toda actividad incluida en el ámbito de esta ley que se realice sin el preceptivo título habilitante o incumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en el mismo, tendrá la consideración legal de prohibida, quedando sujetos quienes la promuevan o realicen a las sanciones previstas en el Título VI de esta ley.

3. Los títulos habilitantes exigibles para el ejercicio de las actividades de juego sometidas a esta ley no podrán ser objeto de cesión o de explotación por terceras personas. Únicamente podrán llevarse a cabo la transmisión del título, previa autorización de la Comisión Nacional del Juego, en los casos de fusión, escisión o aportación de rama de actividad, motivados por una reestructuración empresarial.

4. Los títulos habilitantes otorgados por otros Estados no serán válidos en España. Los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea, deberán cumplir con los requisitos y con la tramitación establecida por la legislación vigente. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento por el que la Comisión Nacional del Juego podrá convalidar aquella documentación ya presentada por un operador autorizado en el espacio económico europeo, eximiendo de su nueva presentación en España

5. Las licencias y autorizaciones reguladas en esta ley se extinguirán en los siguientes supuestos:

- a) Por renuncia expresa del interesado manifestada por escrito.
- b) Por el transcurso de su período de vigencia sin que se solicite o conceda su renovación, cuando dicha renovación se hubiera previsto en las bases de la convocatoria del concurso correspondiente.
- c) Por resolución de la Comisión Nacional del Juego, en la que expresamente se constate la concurrencia de alguna de las causas de resolución siguientes:

1º. La pérdida de todas o alguna de las condiciones que determinaron su otorgamiento.

2º. La muerte o incapacidad sobrevenida del titular de la autorización, cuando sea persona física, la disolución o extinción de la sociedad titular de la licencia o autorización, así como el cese definitivo de la actividad objeto de dichos títulos habilitantes o la falta de su ejercicio durante al menos un año, en los supuestos de licencia.

3º. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

4º. La imposición como sanción en el correspondiente procedimiento sancionador.





- 5º. El incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización o licencia.
- 6º. La cesión o transmisión del título habilitante a través de fusión, escisión o aportación de rama de actividad, sin la previa autorización.
- 7º. La obtención del título habilitante con falsedad o alteración de las condiciones que determinaron su otorgamiento, previa audiencia del interesado, cuando ello proceda.

Artículo 10. Licencias generales.

1. Los interesados en desarrollar actividades de juego no ocasional deberán obtener, con carácter previo al desarrollo de cualquier tipo de juego, una licencia de carácter general por cada modalidad de juego definida en el artículo 3, letra c), d), e), y f), en función del tipo de juego que pretendan comercializar. La Comisión Nacional del Juego promoverá, de oficio o a instancia de parte, un procedimiento concurrencial para la adjudicación de nuevas licencias generales para la explotación y comercialización de juegos que no tengan carácter ocasional.

2. Las licencias generales que al amparo de esta ley pueda conceder la Comisión Nacional del Juego, se otorgarán mediante concurso público que se regirá por el pliego de bases que, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego, sea aprobado por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda y publicado en el Boletín Oficial del Estado. El procedimiento de adjudicación se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia, objetividad y no discriminación.

En el supuesto en el que la convocatoria del concurso público limitara el número de operadores a los cuales se puede adjudicar una licencia, este hecho deberá ser expresamente motivado con base a informes técnicos que justifiquen la necesidad de dimensionar la oferta de juego a los que es objeto de la convocatoria y las razones de interés público que justifican la citada limitación.

En las bases de la convocatoria se podrán incluir como criterios que habrán de ser tenidos en cuenta en la adjudicación, la experiencia de los concurrentes licitadores, su solvencia y los medios con que cuenten para la explotación de la licencia.

3. El pliego de bases del concurso público al que se refiere el número anterior establecerá el capital social mínimo, total y desembolsado, necesario para la participación en la licitación. Junto con la solicitud para participar, el solicitante deberá presentar un plan operativo que tenga en cuenta los principios del juego responsable, la formación de empleados, los canales de distribución, el diseño de juegos y los demás aspectos de su actividad que reglamentariamente se establezcan.

4. El otorgamiento de las licencias generales recogerá el contenido que se determine reglamentariamente y, en todo caso, el siguiente:

- a) Denominación, duración, domicilio y capital social, y en su caso, el porcentaje de participación del capital no comunitario.





- b) Relación de miembros del consejo de administración, directivos, gerentes o apoderados si los hubiere.
- c) Naturaleza, modalidades y tipos de actividad sometidas a licencia, así como los acontecimientos sobre cuyos resultados se realicen aquellos.
- d) Ámbito territorial en el que vaya a desarrollarse la actividad sometida a licencia.
- e) Condiciones de los premios a otorgar por juego o apuesta y cuantía de los mismos que en ningún caso podrá superar el porcentaje que al efecto se establezca.
- f) Relación de los sistemas, equipos, aplicaciones e instrumentos técnicos que serán empleados para la explotación de la actividad.
- g) Autorización para la realización de la actividad publicitaria, de patrocinio o promoción.
- h) Mecanismos de prevención para evitar el fraude y sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a los que se refiere la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- i) Plazo de vigencia, posibilidad de prórroga y causas de extinción de la licencia.
- j) Los sistemas, procedimientos o mecanismos establecidos, de acuerdo con la naturaleza del juego, para evitar el acceso por parte de las personas incursoas en alguna de las prohibiciones subjetivas establecidas en el artículo 6 de esta ley y especialmente los dirigidos a garantizar que se ha comprobado la edad de los participantes .

5. Los licenciatarios tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

- a) Desarrollar la actividad de juego en el ámbito estatal, con los derechos y obligaciones reconocidos en el pliego de bases y en la resolución de adjudicación.
- b) Satisfacer las tasas que se establezcan derivadas de la actividad de regulación del juego.
- c) Obtener la licencia singular de explotación para cada modalidad y tipo de juego.

6. Las licencias generales tendrán una duración de 15 años, prorrogables por un periodo de idéntica duración.

La prórroga de la licencia no tendrá lugar y deberá procederse a su adjudicación en régimen de libre concurrencia en el caso de que concurren los siguientes requisitos:

- a) Que exista un tercero o terceros que pretendan la concesión de la licencia.
- b) Que lo hayan solicitado con un plazo de antelación de al menos 24 meses respecto de la fecha de vencimiento.





c) Que el solicitante o solicitantes cumplan los mismos requisitos que fueron tenidos en cuenta para la obtención de la licencia por parte del adjudicatario o adjudicatarios.

Artículo 11. Licencias singulares.

1. La explotación de cada uno de los tipos de juego incluidos en el ámbito de cada licencia general requerirá el otorgamiento de una licencia singular de explotación.

2. El otorgamiento de las licencias singulares y su prórroga estará sujeta a los requisitos y condiciones que determine la Comisión Nacional del Juego en el marco de la regulación de cada una de las modalidades de juego.

3. Los operadores habilitados con la licencia general podrán solicitar licencias singulares. Sólo podrá solicitarse la licencia singular de aquella actividad de juego de la que haya sido publicada, con carácter previo, su regulación. En el caso de no hallarse regulada, el operador de juego podrá solicitar su regulación al órgano competente que podrá, en su caso, desestimar motivadamente dicha solicitud.

4. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento de obtención de licencias singulares. Los requisitos que se establezcan en el marco del procedimiento para la obtención de licencias singulares respetarán los principios de transparencia, objetividad y no discriminación, y serán proporcionales a los fines de protección de la salud pública, los menores y personas dependientes y a los de la prevención del fraude y del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

5. Las licencias singulares tendrán una duración mínima de un año y máxima de cinco y serán prorrogables por periodos sucesivos de idéntica duración. La regulación de cada una de los tipos de juego determinará la duración de las correspondientes licencias singulares y las condiciones y requisitos que hubieren de cumplirse para su prórroga.

6. La pérdida de la licencia general conllevará la pérdida de las licencias singulares vinculadas a la misma.

Artículo 12. Autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional.

1. La celebración de cualesquiera actividades de juego objeto de esta ley que tenga carácter ocasional o esporádico queda sometida a autorización previa, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

2. El otorgamiento de autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional le corresponde a la Comisión Nacional del Juego que podrá establecer la limitación en la cuantía de los premios.

3. Las personas o entidades que soliciten la autorización deberán satisfacer las tasas correspondientes.





4. Transcurridos tres meses desde la solicitud de autorización sin que se haya notificado su otorgamiento, se entenderá desestimada por silencio.

TÍTULO IV CONTROL DE LA ACTIVIDAD

CAPÍTULO I OPERADORES

Artículo 13. Los operadores.

1. La organización y explotación de las actividades objeto de esta ley podrá ser, según cada caso, efectuada por personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas, con nacionalidad española o de un país perteneciente al Espacio Económico Europeo y que tengan al menos un representante permanente en España.

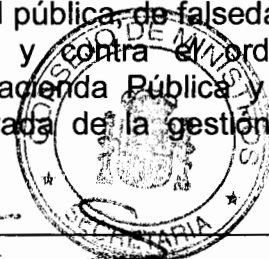
Únicamente podrán participar en el procedimiento concurrencial de adjudicación de licencias generales para la explotación y comercialización de juegos que no tengan carácter ocasional, las personas jurídicas con forma de sociedad anónima que tengan como único objeto social la organización, comercialización y explotación de juegos, constituyéndose, a dicho efecto, como operadores de juegos o apuestas.

Las empresas que soliciten la explotación u organización de los juegos previstos en esta ley deberán acreditar solvencia técnica, económica y financiera, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

La participación directa o indirecta del capital no comunitario tendrá como límite lo establecido en la legislación vigente sobre inversiones extranjeras en España.

2. No podrán ser titulares de las licencias y autorizaciones previstas en el Título III de esta ley, las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de la solicitud del título habilitante, por delito contra la salud pública, de falsedad, de asociación ilícita, de contrabando, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, contra la Administración Pública o contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como por cualquier infracción penal derivada de la gestión o explotación de juegos para los que no hubieran sido habilitados.





- b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
- c) Haber sido sancionada la persona física, la persona jurídica o sus socios, directivos o administradores, mediante resolución administrativa firme por dos o más infracciones muy graves en los últimos cuatro años, por incumplimiento de la Normativa de juego del Estado o de las Comunidades Autónomas.
- d) Haber dado lugar la persona física o la persona jurídica, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración General del Estado.
- e) Estar incurso la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
- f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
- h) Haber sido sancionada la persona física o la persona jurídica mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- i) Haber sido sancionada la persona física o jurídica mediante resolución definitiva por infracciones muy graves recogidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- j) Las entidades participantes u organizadoras de eventos deportivos u otro cualquier acontecimiento sobre el que se realicen las apuestas.

Estas prohibiciones alcanzan a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en dicha situación por





actuaciones realizadas en nombre o en beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurren las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura del tipo para ser sujeto activo del mismo.

Las prohibiciones de obtención del título habilitante afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

Reglamentariamente se determinará el modo de apreciación y alcance de las prohibiciones, así como la justificación por parte de las personas o entidades de no estar incurso en las prohibiciones.

3. Las personas jurídicas que pretendan organizar, explotar y desarrollar las actividades de juego objeto de esta ley solicitando una licencia general, deberán solicitar su inscripción provisional en el Registro General de Licencias y Autorizaciones de Juego, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 14. Garantías exigibles a los operadores.

1. Los operadores que obtengan una licencia general deberán constituir una garantía en los términos, modalidades y las cuantías que reglamentariamente se establezca.

2. La garantía a la que se refiere el número anterior quedará afectada al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y especialmente al abono de los premios, a las responsabilidades derivadas del régimen sancionador y al pago de las tasas devengadas en materia de juego cuando, transcurrido el período que reglamentariamente se establezca, no se hubieran hecho efectivas. Una vez desaparecidas las causas de su constitución y siempre que no se tenga conocimiento de obligaciones o responsabilidades pendientes a las que estuviera afectada, se procederá a su devolución, a petición del interesado, previa la liquidación oportuna cuando proceda.

3. Podrán establecerse garantías adicionales ligadas a la concesión de licencias singulares que serán determinadas por la Comisión Nacional del Juego para cada tipo de juego en las condiciones y con los límites establecidos en las Órdenes Ministeriales que establezcan la normativa básica de los juegos, quedando afectadas al cumplimiento de las específicas obligaciones de abono de los premios y el cumplimiento de cualquier otra obligación del operador.

4. Las garantías deberán mantenerse actualizadas. Si en el plazo de un mes a contar desde la fecha del requerimiento no se llevase a cabo la actualización, el interesado podrá incurrir en causa de revocación del título habilitante.





CAPÍTULO II PARTICIPANTES

Artículo 15. Derechos de los participantes en los juegos.

1. Los participantes en los juegos tienen los siguientes derechos:
 - a) A obtener información clara y veraz sobre las reglas del juego en el que deseen participar.
 - b) A cobrar los premios que les pudieran corresponder en el tiempo y forma establecidos, de conformidad con la normativa específica de cada juego.
 - c) A formular ante la Comisión Nacional del Juego las reclamaciones contra las decisiones del operador que afecten a sus intereses.
 - d) Al tiempo de uso correspondiente al precio de la partida de que se trate.
 - e) A jugar libremente, sin coacciones o amenazas provenientes de otros jugadores o de cualquier otra tercera persona.
 - f) A conocer en cualquier momento el importe que ha jugado o apostado, así como en el caso de disponer de una cuenta de usuario abierta en el operador de juego, a conocer el saldo de la misma.
 - g) A identificarse de modo seguro mediante el documento nacional de identidad, pasaporte o documento equivalente o mediante sistema de firma electrónica reconocida, así como a la protección de sus datos personales conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
 - h) A conocer en todo momento la identidad del operador de juego, especialmente en el caso de juegos telemáticos, así como a conocer, y, en el caso de reclamaciones o posibles infracciones, la identidad del personal que interactúe con los participantes.
 - i) A recibir información sobre la práctica responsable del juego.





2. La relación entre el participante y el operador habilitado constituye una relación de carácter privado, y por tanto, las disputas o controversias que pudieran surgir entre ellos estarán sujetas a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora ejercida por la Comisión Nacional del Juego dentro de las competencias reconocidas en esta ley.

3. Los operadores habilitados establecerán los procedimientos adecuados para mantener la privacidad de los datos de los usuarios de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa complementaria.

Los operadores únicamente tratarán los datos de los participantes que fueran necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad de juego para la que hubieran sido autorizados y para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. Los datos serán cancelados una vez cumplidas las finalidades que justificaron su tratamiento.

En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los operadores deberán informar a los usuarios acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal y las finalidades para las que se produce el tratamiento, así como los derechos que les corresponden de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Los operadores deberán asimismo implantar sobre los ficheros y tratamientos las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos y dar cumplimiento al deber de secreto impuesto por dicha normativa.

CAPÍTULO III

HOMOLOGACIÓN DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS DE JUEGO



Artículo 16. Homologación de los sistemas técnicos de juego.

1. Las entidades que lleven a cabo la organización, explotación y desarrollo de juegos regulados en esta ley dispondrán del material software, equipos, sistemas, terminales, e instrumentos en general necesarios para el desarrollo de estas actividades, debidamente homologados.

2. La homologación de los sistemas técnicos de juego, así como el establecimiento de las especificaciones necesarias para su funcionamiento, corresponde a la Comisión Nacional del Juego, que aprobará en el marco de los criterios fijados el Ministerio de Economía y Hacienda y el Consejo de Políticas del Juego, el procedimiento de certificación de los sistemas técnicos de juego incluyendo, en su caso, las homologaciones de material de juego. La Comisión Nacional del Juego velará para que el establecimiento de las especificaciones, así como los procedimientos de certificación y homologación de material de juego, no introduzcan obstáculos que pudieren distorsionar injustificadamente la competencia en el mercado.



3. Las homologaciones y certificaciones validadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para la concesión de títulos habilitantes de ámbito autonómico, podrán tener efectos en los procedimientos regulados en esta ley en los términos que reglamentariamente se establezcan.

4. En los procedimientos de homologación de los sistemas técnicos de juego que puedan afectar de manera relevante al tratamiento de datos de carácter personal por parte de los operadores, la Comisión Nacional del Juego solicitará informe a la Agencia Española de Protección de Datos.

Artículo 17. Requisitos de los sistemas técnicos.

1. El sistema técnico para la organización, explotación y desarrollo de los juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, con independencia de lo previsto en el artículo 24 de esta ley a efectos de la Inspección y Control, quedará conformado por la Unidad Central de Juegos y el conjunto de sistemas e instrumentos técnicos o telemáticos que posibiliten la organización, comercialización y celebración de juegos por estos medios.

2. El sistema técnico que reunirá las condiciones que se establezcan por la Comisión Nacional del Juego, deberá disponer de los mecanismos de autenticación suficientes para garantizar, entre otros:

- a) La confidencialidad e integridad en las comunicaciones.
- b) La identidad de los participantes, en el supuesto de los juegos desarrollados a través de medios telemáticos e interactivos.
- c) La autenticidad y cómputo de las apuestas.
- d) El control de su correcto funcionamiento.
- e) El cumplimiento de las prohibiciones subjetivas reguladas en el artículo 6 de esta ley.
- f) El acceso a los componentes del sistema informático exclusivamente del personal autorizado o de la propia Comisión Nacional del Juego, en las condiciones que ésta pudiera establecer.

Artículo 18. Unidad Central de Juegos.

1. Los operadores habilitados para la organización, explotación y desarrollo de los juegos de carácter permanente objeto de esta ley, deberán disponer de una Unidad Central de Juegos que cumplirá las especificaciones que, a dicho efecto, establezca la Comisión Nacional del Juego, y que permitirá:

- a) Registrar todas las actuaciones u operaciones realizadas desde los equipos y usuarios conectados a la misma.
- b) Garantizar el correcto funcionamiento de las actividades de juego.





c) Comprobar en todo momento, si así fuera necesario, las operaciones realizadas, los participantes en las mismas y sus resultados, si la naturaleza del juego así lo permite, así como reconstruir de manera fiable todas las actuaciones u operaciones realizadas a través de ella.

2. Los operadores deberán asegurar la existencia de las copias de seguridad necesarias y de que se apliquen las medidas técnicas y los planes de contingencia que permitan garantizar la recuperación de datos ante cualquier clase de incidencia.

3. Los operadores deberán disponer de una réplica de su Unidad Central de Juegos, que permitirá el normal desarrollo de la actividad de los juegos, con todas las garantías, en los supuestos en que la Unidad Principal se hallare fuera de servicio.

4. Tanto la Unidad Central de Juegos como su réplica, incorporarán conexiones informáticas seguras y compatibles con los sistemas de la Comisión Nacional del Juego, que permitan a ésta realizar un control y seguimiento, en tiempo real si así se requiriera, de la actividad de juego llevada a cabo, de los premios otorgados y en su caso, de la devolución de premios que eventualmente se produzca con motivo de la anulación de los juegos, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de realizar inspecciones presenciales. La Unidad Central deberá poder ser monitorizada desde territorio español por la Comisión Nacional del Juego, con independencia de su ubicación. La Comisión Nacional del Juego podrá requerir que unidades secundarias de los sistemas del operador se ubiquen en España con la finalidad de verificación y control de la información.

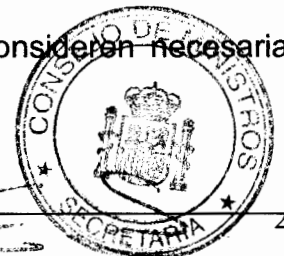
TÍTULO V DE LA ADMINISTRACIÓN DEL JUEGO.

CAPÍTULO I El Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 19. Competencias del Ministerio de Economía y Hacienda.

Corresponderá al titular del Ministerio de Economía y Hacienda las siguientes competencias:

1. Establecer la reglamentación básica de cada juego y en el caso de juegos esporádicos, las bases generales para su práctica o desarrollo, con base en los criterios fijados por el Consejo de Políticas del Juego.
2. Aprobar los pliegos de bases de los concursos públicos a los que se refiere el artículo 10.2 de esta ley, de acuerdo con el marco establecido en el reglamento de licencias y su normativa de desarrollo.
3. Elaborar y modificar las normas en materia de juego que se consideren necesarias para el cumplimiento de las finalidades de esta ley.
4. Autorizar la realización de actividades de lotería sujetas a reserva.





5. Proponer el nombramiento del Presidente y de los consejeros de la Comisión Nacional del Juego.
6. Instruir el expediente de cese de los miembros de la Comisión del Juego al que se refiere el artículo 29 f) de esta ley.
7. Cuantas otras se establezcan en esta ley.

CAPÍTULO II La Comisión Nacional del Juego.

Artículo 20. Objeto y naturaleza jurídica.

1. Se crea la Comisión Nacional del Juego que tendrá por objeto velar por el adecuado funcionamiento del sector del juego y garantizar la efectiva disponibilidad y prestación de servicios competitivos en beneficio de los usuarios. Su finalidad es autorizar, supervisar, controlar y, en su caso, sancionar, el desarrollo, explotación y comercialización de los juegos y demás actividades previstas en el ámbito de aplicación de esta ley.

Como principio rector, deberá velar por la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego, así como por el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones establecidas para la explotación de las actividades de juego.

Asimismo, canalizará la demanda dimensionando la oferta de actividades de juego, evitando la explotación de las actividades de juego con fines fraudulentos y estableciendo el marco apropiado para proteger a los menores y prevenir el desarrollo de fenómenos de dependencia.

2. La Comisión Nacional del Juego se configura como un Organismo Regulador, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

3. La Comisión Nacional del Juego es un organismo funcionalmente independiente de la Administración General del Estado, si bien se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que asume el ejercicio de las funciones de coordinación entre la Comisión y el Ministerio.

4. Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, se aprobará el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como cualesquiera otros aspectos que fueran precisos para el cumplimiento de sus funciones y que en todo caso, deberá tener el siguiente contenido:

a) Las funciones a desarrollar y, en su caso, las facultades decisorias correspondientes a las competencias que asume de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos, y cualesquiera otras que se le atribuyan.

b) La determinación de la sede, estructura orgánica y régimen de funcionamiento.





c) Los medios personales, materiales, económico-financieros y patrimoniales que se adscriben a la Comisión Nacional del Juego.

d) La forma de participación de las Comunidades Autónomas o de otras Administraciones Públicas en la Comisión Nacional del Juego,

5. En el ejercicio de sus funciones públicas, y en defecto de lo dispuesto en esta ley y en las normas que la completen o desarrollen, la Comisión Nacional del Juego actuará con arreglo a lo establecido en su legislación específica y supletoriamente por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Artículo 21. Funciones.

Son funciones de la Comisión Nacional del Juego, las siguientes:

1. Desarrollar la regulación básica de los juegos y las bases generales de los juegos esporádicos cuando así se determine en la Orden Ministerial que las apruebe.
2. Proponer al titular del Ministerio de Economía y Hacienda los pliegos de bases de los concursos públicos a los que se refiere el artículo 10.2 de esta ley y conceder los títulos habilitantes necesarios para la práctica de las actividades reguladas objeto de esta ley.
3. Informar, con carácter preceptivo, la autorización de las actividades de lotería sujetas a reserva.
4. Dictar instrucciones de carácter general a los operadores de juego.
5. Establecer los requisitos técnicos y funcionales necesarios de los juegos, los estándares de operaciones tecnológicas y certificaciones de calidad, y los procesos, procedimientos, planes de recuperación de desastres, planes de continuidad del negocio y seguridad de la información, de acuerdo con las previsiones contenidas en los reglamentos correspondientes y los criterios fijados por el Consejo de Políticas del Juego.
6. Homologar el software y los sistemas técnicos, informáticos o telemáticos precisos para la realización de los juegos, así como los estándares de los mismos.
7. Vigilar, controlar, inspeccionar y, en su caso, sancionar las actividades relacionadas con los juegos, en especial las relativas a las actividades de juego reservadas a determinados operadores en virtud de esta ley.





8. Perseguir el juego no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado español, ya desde fuera de España y que se dirija al territorio del Estado, pudiendo requerir a cualquier proveedor de servicios de pago, entidades de prestación de servicios de comunicación audiovisual, servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas, información relativa a las operaciones realizadas por los distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante o el cese de los servicios que estuvieran prestando.

9. Asegurar que los intereses de los participantes y de los grupos vulnerables sean protegidos, así como el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y principios que los regulan, para defender el orden público y evitar el juego no autorizado.

10. Establecer los cauces apropiados para proporcionar al participante una información precisa y adecuada sobre las actividades de juego y procedimientos eficaces de reclamación.

11. Resolver las reclamaciones que puedan ser presentadas por los participantes contra los operadores.

12. Gestionar los registros previstos en esta ley.

13. Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de juego, así como sobre su incidencia o impacto en la sociedad.

14. Colaborar en el cumplimiento de la legislación de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y vigilar el cumplimiento de la misma..

15. Ejercer la función arbitral de conformidad con el artículo 25 de esta ley.

16. Cualquier otra competencia de carácter público y las potestades administrativas que en materia de juegos actualmente ostenta la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, con la salvedad de las funciones policiales que correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

17. Cualquier otra función que se le atribuya por el ordenamiento jurídico.

Artículo 22. Los Registros del sector del juego.

1. La Comisión Nacional del Juego constituirá, bajo su dependencia y control, los siguientes Registros de ámbito estatal:

a) El Registro General de Licencias de Juego, en el que se practicarán las inscripciones de carácter provisional de las empresas que participen en los concursos de licencias generales, así como las inscripciones de carácter definitivo de las entidades que hayan obtenido una licencia para desarrollar la actividad de juego.





b) El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, en el que se inscribirá la información necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a que les sea prohibida la participación en las actividades de juegos en los casos en que sea necesaria la identificación para la participación en las mismas. Asimismo se inscribirá la información relativa aquellas otras personas que, por resolución judicial tengan prohibido el acceso al juego o se hallarán incapacitados legalmente. Los requisitos de carácter subjetivo preceptivos para la inscripción en este registro serán determinados por la Comisión Nacional del Juego. La información de este registro se facilitará a los operadores de juego con la finalidad de impedir el acceso al juego de las personas inscritas en este registro.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para coordinar la comunicación de datos entre los Registros de Interdicción de Acceso al Juego de las distintas Comunidades Autónomas y el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

c) Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego, en el que se inscribirán los datos de los accionistas, partícipes o titulares significativos de la propia empresa de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado.

2. El tratamiento de los datos de carácter personal en los ficheros y registros a los que se refiere el apartado anterior, para los fines previstos en esta ley, no requerirá del consentimiento de sus titulares.

Reglamentariamente se determinará el contenido concreto de los registros a los que se refiere el presente artículo. Los registros no incluirán más datos que los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas para los mismos en esta ley.

El contenido de los registros referidos en el presente artículo no presenta carácter público, quedando limitada la comunicación de los datos contenidos en los mismos, única y exclusivamente, a las finalidades previstas en esta ley.

3. Reglamentariamente se establecerá la organización y funcionamiento de los registros del sector del juego. En este marco, la Comisión Nacional del Juego y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán acordar, mediante los oportunos convenios de colaboración, la interconexión de sus registros de juego y el intercambio de datos e información tributaria, con pleno respeto a la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

Artículo 23. Competencia regulatoria.

1. La Comisión Nacional del Juego podrá dictar aquellas disposiciones que exijan el desarrollo y ejecución de las normas contenidas en esta ley, en los Reales Decretos aprobados por el Gobierno o en las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda, siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso para ello. Estas disposiciones se elaborarán por la propia Comisión Nacional del Juego, previos los informes técnicos y jurídicos oportunos de los servicios competentes de la misma, y la consulta, en su caso, a las Comunidades Autónomas.





Tales disposiciones serán aprobadas por el Consejo de la Comisión Nacional del Juego y no surtirán efectos hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 2 del Código Civil.

2. Cuando se dicten disposiciones que puedan incidir significativamente en las condiciones de competencia de los operadores de juego, la Comisión Nacional del Juego estará obligada a solicitar informe previo al órgano competente en materia de defensa de la competencia.

3. Las disposiciones o resoluciones que dicte la Comisión Nacional del Juego en el ejercicio de las potestades administrativas que se le confieren en esta ley pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

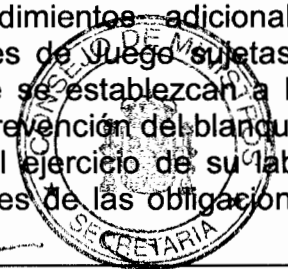
Artículo 24. Inspección y Control.

1. Al objeto de garantizar lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que la complementen, corresponderá a la Comisión Nacional del Juego la auditoría, vigilancia, inspección y control de todos los aspectos y estándares administrativos, económicos, procedimentales, técnicos, informáticos, telemáticos y de documentación, relativos al desarrollo de las actividades previstas en esta ley.

Asimismo, corresponderá a la Comisión Nacional del Juego la investigación y persecución de los juegos ilegales, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los términos del artículo 45.4 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Comisión Nacional del Juego establecerá los procedimientos necesarios en orden al cumplimiento de las funciones antes citadas.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en el punto 4 del apartado primero a) del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, colaborarán con la Comisión Nacional del Juego en las funciones de vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. Si como resultado de la actividad inspectora llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de las funciones de colaboración con la Comisión Nacional del Juego se comprobara la existencia de indicios de la comisión de una infracción, se levantará el oportuno acta que será enviada a los órganos competentes para iniciar el procedimiento sancionador.

2. Por la Comisión Nacional del Juego se establecerán los procedimientos adicionales para el seguimiento y control de los operadores que realicen actividades de juego sujetas a reserva en virtud de una ley y del cumplimiento de las condiciones que se establezcan a los mismos, en especial, en relación con la protección del orden público y la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En el supuesto de que, en el ejercicio de su labor inspectora, la Comisión Nacional del Juego apreciara posibles infracciones de las obligaciones





establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, informará a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los términos del artículo 48.1 de la citada ley.

3. La Comisión Nacional del Juego podrá efectuar un control sobre la cuenta de usuario del participante en las actividades de juego objeto de esta ley, así como de los operadores o proveedores de servicios de juego. La Comisión Nacional del Juego tendrá acceso a los datos de carácter personal recogidos en la cuenta de usuario de los participantes, respetando en todo momento lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y su normativa de desarrollo.

4. Los operadores habilitados, sus representantes legales y el personal que en su caso se encuentre al frente de las actividades en el momento de la inspección, tendrán la obligación de facilitar a los inspectores y a su personal auxiliar el acceso a los locales y a sus diversas dependencias, así como el examen de los soportes técnicos e informáticos, libros, registros y documentos que solicite la inspección. El resultado de la inspección se hará constar en acta que tendrá la naturaleza de documento público y harán prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos y circunstancias que la motiven.

El acta deberá ser firmada por los funcionarios que las extiendan y por la persona o representante de la entidad fiscalizada quien podrá hacer constar cuantas observaciones estime convenientes. Se entregará copia del acta a la persona o representante de la entidad fiscalizada, dejando constancia, en su caso, de su negativa a firmarla o a estar presente en el desarrollo de la inspección.

En el ejercicio de las funciones de inspección el personal de la Comisión Nacional del Juego tendrá la condición de autoridad. El ejercicio de las facultades de inspección y control podrá ser objeto de convenio con las Comunidades Autónomas respecto de las actividades de los medios o instrumentos situados en su territorio, con excepción de las de carácter resolutorio.

La Comisión Nacional del Juego colaborará con otros organismos reguladores del Espacio Económico Europeo en la persecución del juego ilegal, mediante la adopción de medidas coordinadas para obtener la cesación en la prestación de servicios ilegales de juego y el intercambio de información.

5. La Comisión Nacional del Juego podrá firmar acuerdos de corregulación que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, en particular en lo referido a la publicidad, en los términos que se determinen reglamentariamente. En la medida en que dichos acuerdos afecten a la publicidad efectuada por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberá recabarse informe del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con carácter previo a la firma de los mismos. Los sistemas de autorregulación se dotarán de órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas. Sus códigos de conducta podrán incluir, entre otras, medidas individuales o colectivas de autocontrol previo de los contenidos publicitarios, y deberán establecer sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión Europea, de conformidad con lo previsto en la Resolución del Consejo





de 25 de mayo de 2000 relativo a la red comunitaria de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier disposición equivalente.

Artículo 25. Arbitraje de la Comisión Nacional del Juego

1. La Comisión Nacional del Juego actuará como órgano arbitral en los conflictos que le sometan los operadores de juegos, en el marco del régimen establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, cuyas normas se aplicarán supletoriamente en lo no previsto en esta ley ni en sus normas de desarrollo.

2. La función arbitral no tendrá carácter público y será gratuita, salvo los gastos generados por la práctica de las pruebas.

3. El procedimiento, que se regulará en el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego, se ajustará a los principios de igualdad entre las partes, audiencia y contradicción.

Artículo 26. El Consejo. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional del Juego.

1. El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones atribuidas a la Comisión Nacional, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar. Entre sus facultades indelegables se encuentran la aprobación de los presupuestos de la Comisión Nacional del Juego y de su memoria anual y sus planes anuales o plurianuales de actuación en que se definan sus objetivos y sus prioridades, así como las funciones de arbitraje y la potestad de dictar instrucciones de carácter general a los operadores de juego.

2. Serán miembros del Consejo, el Presidente de la Comisión Nacional del Juego, que también lo será del Consejo, y cuatro consejeros.

3. A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz pero sin voto, el personal directivo, así como el personal no directivo que determine el Presidente, de acuerdo con los criterios generales que a tal efecto acuerde el Consejo.

4. Corresponde a la presidencia del Consejo el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Ejercer, en general, las competencias que a los Presidentes de los órganos colegiados administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

b) Convocar al Consejo por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros, y presidirlo.

c) Establecer el criterio de distribución de asuntos entre los consejeros.

5. El Consejo se entenderá válidamente constituido con la asistencia del Presidente y dos consejeros. La asistencia de los consejeros a las reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos debidamente justificados.





6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto de quien presida.

7. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, le suplirá el consejero de mayor antigüedad y, a igual antigüedad, el de mayor edad.

8. El Consejo, a propuesta del Presidente, elegirá un Secretario no consejero, que tendrá voz pero no voto, al que corresponderá asesorar al Consejo en derecho, informar sobre la legalidad de los asuntos sometidos a su consideración, así como las funciones propias de la secretaría de los órganos colegiados. El servicio jurídico de la Comisión Nacional del Juego dependerá de la Secretaría del Consejo.

9. El Consejo aprobará el Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión Nacional del Juego, en el que se regulará la actuación de sus órganos, la organización del personal, el régimen de transparencia y de reserva de la información y, en particular, el funcionamiento del Consejo, incluyendo su régimen de convocatorias y sesiones, y el procedimiento interno para la elevación de asuntos para su consideración y su adopción. La aprobación del Reglamento requerirá el voto favorable de, al menos, tres de los miembros del Consejo.

10. El Presidente y los consejeros serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Economía y Hacienda, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia oportuna de las personas propuestas como Presidente y Consejeros ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, que versará sobre la capacidad de los candidatos. La comparecencia del Presidente, además, se extenderá a su proyecto de actuación sobre el organismo y sobre el sector regulado.

11. El mandato del Presidente y los consejeros será de seis años sin posibilidad de reelección como miembro del Consejo. La renovación de los consejeros se hará parcialmente para fomentar la estabilidad y continuidad del Consejo.

Artículo 27. El Presidente de la Comisión Nacional del Juego.

Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional del Juego:

- a) Representar legal e institucionalmente a la Comisión Nacional del Juego.
- b) Velar por el adecuado desarrollo de las actuaciones de la Comisión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
- c) Mantener el buen orden y gobierno de la organización de la Comisión.
- d) Impulsar la actuación de la Comisión y el cumplimiento de las funciones que tenga encomendadas. En particular, la elaboración de planes anuales o plurianuales de actuación en los que se definan sus objetivos y prioridades.
- e) Ejercer funciones de dirección y coordinación en relación con los directivos y el resto del personal de la Comisión Nacional del Juego, de acuerdo con las competencias atribuidas por su legislación específica.





- f) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades de la Comisión.
- g) Dar cuenta al titular del Ministerio de Economía y Hacienda de las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Comisión Nacional del Juego.
- h) Dirigir la ejecución de los presupuestos de la Comisión Nacional del Juego, así como la rendición de cuentas del mismo.
- i) Dirigir la contratación de la Comisión.
- j) Efectuar la rendición de cuentas de la Comisión Nacional del Juego.
- k) Cuantas funciones le delegue el Consejo.

Artículo 28. Funciones de los miembros del Consejo.

1. El Presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Juego ejercerán su función con dedicación absoluta.

2. Sin perjuicio de su función como ponentes de los asuntos que les asigne el Presidente, en aplicación de lo previsto en la letra c) de apartado 4 del artículo 26 de esta ley, los consejeros no podrán asumir individualmente funciones ejecutivas o de dirección de áreas concretas de la Comisión Nacional del Juego, las cuales corresponderán al personal directivo.

3. El Presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Juego estarán sometidos al régimen de incompatibilidad de actividades establecido para los altos cargos de la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y en sus disposiciones de desarrollo, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Artículo 29. Causas de cese en el ejercicio del cargo.

El Presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Juego cesarán en su cargo:

- a) Por renuncia.
- b) Por expiración del término de su mandato.
- c) Por incompatibilidad sobrevenida.
- d) Por haber sido condenado por delito doloso.
- e) Por incapacidad permanente.





- f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de interés, y del deber de reserva. La separación será acordada con independencia del régimen sancionador que en su caso pudiera corresponder y se adoptará por iniciativa del Gobierno, previa instrucción de expediente por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 30. Régimen de contratación.

Los contratos que celebre la Comisión Nacional del Juego se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, Asimismo, podrá formalizar convenios o conciertos con cualesquiera entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, estando sometida en este último supuesto a las condiciones que pueda establecer el Ministerio de Economía y Hacienda y pudiendo incorporar a dicho efecto cláusulas de arbitraje a los citados convenios en orden a la resolución de las controversias que pudieren suscitarse.

Artículo 31. Régimen de personal.

1. El personal al servicio de la Comisión Nacional del Juego será funcionario o laboral en los términos establecidos para la Administración General del Estado, de acuerdo con su Estatuto.

2. El personal funcionario se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y las demás normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. El personal laboral se regirá, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan.

3. La selección del personal al servicio de la Comisión Nacional del Juego se realizará mediante convocatoria pública, a través de procedimientos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad. La selección del personal directivo atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

4. La Comisión Nacional del Juego contará con una relación de puestos de trabajo en la que constará, en su caso, los puestos que deban ser desempeñados por funcionarios de carrera porque conlleven el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

5. La provisión de puestos de trabajo se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y las demás normas aplicables al personal al servicio de la Administración General del Estado.

6. El personal que preste servicio en la Comisión Nacional del Juego estará sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.





Artículo 32. Régimen Presupuestario y de Control.

1. La Comisión Nacional del Juego elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de Economía y Hacienda y lo remitirá a éste para su elevación al acuerdo del Gobierno y posterior remisión a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado. Las variaciones en el presupuesto serán autorizadas por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, cuando su importe no exceda de un cinco por ciento del mismo, y por el Gobierno, en los demás casos.

2. El régimen de su control económico y financiero se ajustará a las previsiones contenidas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria para este tipo de entidades.

Artículo 33. Régimen Económico-Financiero y recursos de la Comisión Nacional del Juego.

1. La Comisión Nacional del Juego contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes recursos:

- a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.
- c) Los ingresos obtenidos por la liquidación de las tasas previstas en esta ley.
- d) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

2. El patrimonio de la Comisión Nacional del Juego estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

CAPÍTULO III.

Del Consejo de Políticas del Juego

Artículo 34. El Consejo de Políticas de Juego.

1. El Consejo de Políticas de Juego será el órgano de participación y coordinación de las Comunidades Autónomas y el Estado en materia de juego.

2. En el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego se establecerán otros procedimientos a través de los cuales se materialice la participación y comunicación con las Comunidades Autónomas a través de la emisión de informes o formulación de propuestas que el Consejo de Políticas del Juego pueda considerar oportunas para una mejor coordinación en el ejercicio de las competencias estatales y autonómicas.

3. El Consejo de Políticas de Juego estará integrado por los consejeros que desempeñen las responsabilidades en materia de juego de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas y por un número paritario de representantes de la Administración General del Estado. La presidencia del Consejo corresponderá al titular del Ministerio de Economía y Hacienda y la Secretaría permanente al Ministerio de Economía y Hacienda.





4. El Consejo de Políticas del Juego elaborará un reglamento de funcionamiento que determinará el régimen de convocatorias y de aprobación de acuerdos del mismo. Este reglamento de funcionamiento del Consejo de Políticas del Juego será aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 35. Competencias.

El Consejo de Políticas del Juego entenderá de las siguientes materias:

- a) Normativa básica de los diferentes juegos.
- b) Desarrollo de la regulación básica de los juegos y de las bases generales de los juegos esporádicos.
- c) Criterios para el otorgamiento de licencias.
- d) Definición de los requisitos de los sistemas técnicos de juego y su homologación.
- e) Principios para el reconocimiento de las certificaciones, y homologaciones de licencias otorgadas por los órganos de las Comunidades Autónomas competentes en materia de juego.
- f) Coordinación de la normativa sobre las medidas de protección a los menores y personas dependientes.
- g) En general, todo aspecto de las actividades de juego que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada del Estado y las Comunidades Autónomas.

TÍTULO VI RÉGIMEN SANCIONADOR



Artículo 36. Competencia

1. La Comisión Nacional del Juego ejercerá la potestad sancionadora respecto de las infracciones administrativas cometidas en materia de juego objeto de esta ley, de operadores de juego, de edad o a las personas incluidas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

2. En el caso de que la infracción sea realizada por una entidad sujeta a la vigilancia o inspección de un Organismo Regulador distinto a la Comisión Nacional de Juego o cuando por razón de la materia resultare competente otro órgano administrativo, la Comisión Nacional del Juego, a los efectos de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, dará traslado a aquél de los hechos supuestamente constitutivos de infracción. En todo caso, la Comisión Nacional de Juego será competente para sancionar por la comisión de las infracciones previstas en la letra e) del artículo 40.



3. En particular, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual o medios de comunicación social serán responsables administrativos de la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos sujetos a esta ley cuando quienes los realicen carezcan de título habilitante o que se difundan sin disponer de la autorización para publicitarlos o al margen de los límites fijados en la misma o infringiendo las normas vigentes en esta materia. La competencia para instruir los procedimientos y sancionar a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual corresponde al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, aplicándose en estos casos el régimen sancionador previsto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, salvo la excepción prevista en el párrafo anterior, respecto de las infracciones del artículo 40 letra e).

4. Cuando la infracción sea cometida por una entidad intermediaria cuyo ámbito de actuación se limite al territorio de una Comunidad Autónoma o cuando la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos a través de medios presenciales se realice en el territorio de una Comunidad Autónoma, será competente para ejercer la potestad sancionadora el órgano autonómico correspondiente.

Artículo 37. Infracciones.

1. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas en esta ley y que pueden ser especificadas en los reglamentos que la desarrollen.

2. Las infracciones administrativas en esta materia se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 38. Sujetos infractores.

1. Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta ley, las soporten, publiciten, promocionen u obtengan beneficio de las mismas.

2. Se consideran también sujetos infractores y organizadores de juego a los efectos del presente artículo, exigiéndoseles idéntica responsabilidad, a las personas físicas o jurídicas que obtuvieran un beneficio relevante vinculado directamente al desarrollo de actividades de juego como consecuencia de las acciones u omisiones referidas en el párrafo anterior.

Artículo 39. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a) La organización, celebración o explotación de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley careciendo del título habilitante correspondiente.

b) Realizar, promocionar, permitir o consentir, expresa o tácitamente, la organización, celebración o explotación de las actividades objeto de esta ley en medios o soportes o por





canales de distribución no autorizados y, en particular, mediante el empleo de software, sistemas de comunicación, materiales o equipos no autorizados o no homologados.

c) La cesión del título habilitante, así como su transmisión en los supuestos previstos en el artículo 9.3, sin la previa autorización de la Comisión Nacional del Juego.

d) La obtención de las correspondientes autorizaciones o licencias mediante la aportación de documentos o datos falsos e inciertos.

e) El impago injustificado y reiterado de los premios que correspondieren a los participantes de los juegos.

f) La alteración o manipulación de los sistemas técnicos previamente homologados o de cualquier otro elemento relativo a la obtención de premios en perjuicio de los participantes.

g) La realización de actividades de juego infringiendo la reserva establecida en el artículo 4 de esta ley.

h) La comisión de dos infracciones graves en el plazo de dos años, con sanción definitiva en vía administrativa.

Artículo 40. Infracciones graves

Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de los requisitos y condiciones fijados en el título habilitante y, en particular, de los deberes de control para garantizar la seguridad de los juegos.

b) Permitir el acceso a la actividad de juego a las personas que lo tienen prohibido, de conformidad con el artículo 6 de esta ley, siempre que la entidad explotadora de juegos conozca o deba conocer la concurrencia de tales prohibiciones.

c) La concesión de préstamos o cualquier otra modalidad de crédito a los participantes por parte de los operadores.

d) Efectuar la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos objeto de esta ley, o actuaciones de intermediación, cuando quienes lo realicen carezcan de título habilitante o se difundan con infracción de las condiciones y límites fijados en el mismo o infringiendo las normas vigentes en esta materia, cualquiera que sea el medio que se utilice para ello.

e) El incumplimiento de los requerimientos de información o de cese de prestación de servicios dictados por la Comisión Nacional del Juego que se dirijan a los proveedores de servicios de pago, prestadores de servicios de comunicación audiovisual, prestadores de servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas y medios de comunicación social.

f) La obstrucción, resistencia o excusa a la función de inspección y control así como la ocultación o destrucción de la información, documentos o soportes de la misma.





g) La negativa reiterada de los operadores u organizadores a facilitar la información que le sea requerida por la Comisión Nacional del Juego.

h) La negativa reiterada a atender las reclamaciones o quejas formuladas por los participantes o la Comisión Nacional del Juego.

i) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación de aquellas modificaciones efectuadas en la composición, sede, capital y titularidad de las acciones o participaciones de las personas jurídicas habilitadas, en el plazo de tres meses desde que se hubieran realizado.

j) El incumplimiento de los requisitos técnicos de los reglamentos o del pliego de bases relativos al software y a los sistemas de comunicación.

k) La utilización de sistemas técnicos no homologados o no autorizados.

l) La fabricación, comercialización, mantenimiento o distribución de material de juego propiedad de los operadores que desarrollen actividades de juego objeto de reserva en el artículo 4 de esta ley.

m) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de dos años, con sanción definitiva en vía administrativa.

Artículo 41. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves:

a) La participación en actividades de juego, contraviniendo las prohibiciones establecidas en artículo 6.2. letra c), d), e), f), g) y h) de esta ley.

b) Los incumplimientos de las obligaciones contenidas en esta ley, cuando no estuvieren expresamente tipificadas como infracciones graves o muy graves y, en general, aquellas que no perjudiquen a terceros ni generen beneficios al infractor o a personas relacionadas con éste ni redunden en perjuicio de los intereses de la Hacienda pública.

c) No colaborar con los inspectores o agentes de la autoridad en relación con el desarrollo de las actividades de juego o lo relacionado con la comprobación del sorteo o evento en cuya virtud se obtengan los premios.

d) No informar debidamente al público de la prohibición de participar a los menores de edad y a las personas incluidas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

e) No informar al público sobre el contenido del título habilitante del operador de juego.





Artículo 42. Sanciones administrativas.

1. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas por la Comisión Nacional del Juego con:

- a) Apercibimiento por escrito.
- b) Multa de hasta cien mil euros.

2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas por la Comisión Nacional del Juego con las siguientes sanciones:

- a) Multa de cien mil a un millón de euros.
- b) Suspensión de la actividad por un plazo máximo de seis meses.

3. Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego, con multa de un millón a cincuenta millones de euros. Además de la multa, podrá imponerse la pérdida del título habilitante, la inhabilitación para la realización de las actividades previstas en el artículo 1 de esta ley por un período máximo de cuatro años o la clausura de los medios por los que se presten servicios de la sociedad de la información que soporten las actividades de juego.

4. La Comisión Nacional del Juego en aquellos supuestos en los que el infractor careciera de título habilitante o éste le hubiere sido revocado, podrá acordar adicionalmente el comiso y la destrucción de cualquier elemento relativo al desarrollo de la actividad.

5. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de las transacciones efectuadas, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

6. Si en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate.

Artículo 43. Prescripción.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año.

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año.





2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En los casos de infracción continuada, se computará desde el día en que se realizó la última infracción. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de tres meses por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones se computará desde el día siguiente a aquél en que resulte firme la resolución por la que se impone la sanción. Se interrumpirá la prescripción de las sanciones, con conocimiento del interesado, por la iniciación del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir dicho plazo si aquél estuviere paralizado durante más de tres meses por causa no imputable al infractor.

Artículo 44. Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo de la Comisión Nacional del Juego, por propia iniciativa, por acta motivada de la Inspección, por petición razonada de otros órganos o por denuncia.

2. El procedimiento sancionador, que se resolverá en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, se ajustará a lo previsto en la presente ley y su desarrollo reglamentario, siendo de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora en la Administración General del Estado.

Artículo 45. Régimen de recursos.

Las resoluciones que dicte la Comisión Nacional del Juego en los expedientes sancionadores pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser recurridas potestativamente en reposición de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Artículo 46. Medidas cautelares.

1. Durante la sustanciación del procedimiento o en el propio acuerdo de inicio, la Comisión Nacional del Juego podrá acordar alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:

- a) Suspensión temporal de la actividad objeto del correspondiente título habilitante.
- b) Decomiso o precinto, en su caso, si los hubiere, de cualquier bien o documentación relativa al desarrollo de la actividad objeto del correspondiente título habilitante.

2. Mediante acuerdo motivado la Comisión Nacional del Juego podrá, antes de la iniciación del procedimiento sancionador, tomar alguna de las medidas de carácter provisional señaladas en el apartado anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 72.2 y 136 de la Ley





30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento o las exigencias de los intereses generales y, en general, las demás que pudieren declararse en otros órdenes.

3. Los funcionarios de inspección y control de la Comisión Nacional del Juego, en el momento de levantar el acta correspondiente, debidamente comisionados y autorizados, podrán adoptar las medidas cautelares a que se refiere el párrafo anterior, así como proceder al precintado y depósito de cualquiera de los elementos, equipos, bienes y documentación relativos a la actividad objeto de esta ley. Esta medida cautelar deberá ser confirmada o levantada por el órgano a quien compete la apertura del expediente sancionador, en los términos, plazos y efectos que se establecen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común.

Artículo 47. Medidas en relación con los prestadores de servicios de intermediación.

1. La Comisión Nacional del Juego en el ejercicio de las competencias establecidas en esta ley evitará el ejercicio de actividades de juego ilegal realizadas por operadores de juego a través de prestadores de servicios de la sociedad de la información.

2. La Comisión Nacional del Juego podrá adoptar medidas cautelares o definitivas para que se interrumpan las actividades de juego ilegal realizadas por operadores de juegos mediante servicios de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que constituyan actividades de juego realizadas sin el título habilitante correspondiente.

3. Si la ejecución de una Resolución por la que se adopte la interrupción de actividades de juego ilegal realizadas por operadores de juegos mediante servicios de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos o promoción de actividades relacionadas con la actividad del juego ilegal exigiera la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, la Comisión Nacional del Juego podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el servicio de intermediación o retiren los contenidos en los términos previstos en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio.

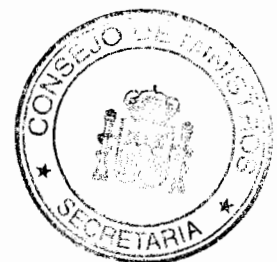
4. Las medidas a las que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones sancionadoras que correspondan.

TITULO VII RÉGIMEN FISCAL

Artículo 48. Impuesto sobre actividades de juego.

1. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la autorización, celebración y organización de los juegos, rifas, concursos, apuestas y actividades de ámbito estatal, reguladas en el apartado 1 del artículo 2,





así como las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, asimismo, de ámbito estatal, pese a la exclusión del concepto de juego, reguladas en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo, sin perjuicio de los regímenes forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y de Navarra, respectivamente y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

2. Supuestos de no sujeción.

No estarán sujetos al impuesto los juegos de lotería de ámbito estatal, con independencia del operador, público o privado, que los organice o celebre.

3. Devengo.

El devengo del impuesto se producirá con la autorización, celebración u organización. Cuando se trate de autorizaciones, celebraciones u organizaciones que se extiendan a periodos temporales, el devengo se producirá el primer día de cada año natural, salvo el año en que se obtenga la autorización, en el que el devengo se producirá en la fecha de su autorización.

4. Sujetos pasivos a título de contribuyentes.

Serán sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas físicas, jurídicas o las entidades recogidas en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que operen, organicen o desarrollen las actividades gravadas por este impuesto.

5. Responsables.

a) Serán responsables solidarios del pago del impuesto los dueños o empresarios de las infraestructuras en que se celebren, los medios de comunicación a través de los que se difundan, los medios publicitarios y cualquier entidad que publicite de cualquier forma estas actividades, cuando no hubieran constatado que se celebran u organizan con los necesarios títulos habilitantes o comunicaciones.

En relación con el párrafo anterior, cualquier entidad podrá solicitar a la Comisión Nacional del Juego, la información necesaria para saber si una actividad cuenta con los títulos habilitantes o se han efectuado las comunicaciones necesarias para su desarrollo, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y demás normativa aplicable.

La Comisión Nacional del Juego, a la vista de la solicitud anterior, certificará si el operador cuenta con el título habilitante o si ha comunicado su intención de organizar o celebrar actividades de juego o combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, respectivamente, gravadas por este tributo.

No producirán efecto las certificaciones, cualquiera que sea su contenido, si la fecha de presentación de la solicitud resultase posterior a la de la publicidad efectuada

b) En el caso de actividades de juego transfronterizas, serán responsables solidarios del pago del impuesto, quienes ofrezcan, por cualquier medio, actividades de juego a personas con domicilio fiscal en España o quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego





6. Base imponible.

La base imponible podrá estar constituida, según cada tipo de juego, por:

a) Los ingresos brutos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda obtener, directamente derivado de su organización o celebración, o

b) Los ingresos netos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener, directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los premios satisfechos por el operador a los participantes.

Cuando se trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino que, simplemente, efectúen su traslado a los jugadores que los hubieran ganado, se entenderá que los ingresos a que se refieren las letras anteriores son los definidos como tales en el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas.

En las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, la base imponible será el importe total del valor de mercado de los premios o ventajas concedidas a los participantes.

En el caso de que el importe sea satisfecho a través de instrumentos de tarificación adicional, se considerará que la cantidad dedicada a la participación en el juego es el valor total del servicio (llamada telefónica, SMS u otros) que deba satisfacer el participante, excluido el impuesto indirecto correspondiente.

7. Tipo de gravamen.

Los tipos aplicables serán:

1. Apuestas deportivas mutuas: 22 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.
2. Apuestas deportivas de contrapartida: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.
3. Apuestas deportivas cruzadas: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.
4. Apuestas hípcas mutuas: 15 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.
5. Apuestas hípcas de contrapartida: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.





6. Otras apuestas mutuas: 15 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.

7. Otras apuestas de contrapartida: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.

8. Otras apuestas cruzadas: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.

9 Rifas: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo. Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 7 por ciento de la misma base imponible.

10. Concursos: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.

10. Otros Juegos. 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.

11. Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, 10 por ciento sobre la base imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de este artículo.

Las Comunidades Autónomas, respecto de las actividades que sean ejercidas por operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este impuesto con domicilio fiscal en su territorio, podrán elevar los tipos del impuesto, hasta un máximo del 20 por ciento de los tipos establecidos en este apartado, incremento que se aplicará, exclusivamente, sobre los importes jugados por quienes tengan su domicilio fiscal en su territorio.

8. Liquidación.

En los supuestos de autorización, celebración u organización que alcancen a periodos temporales, los obligados tributarios deberán efectuar la declaración y autoliquidar el impuesto. En particular, cuando se trate de actividades anuales o plurianuales, se deberá efectuar la declaración y autoliquidar el impuesto trimestralmente, en el plazo del mes siguiente al del final de cada trimestre.

En otro caso, el impuesto será objeto de liquidación administrativa. No obstante, en los supuestos de devengo con la celebración u organización de la actividad de que se trate, el obligado tributario deberá poner en conocimiento de la Administración su voluntad de llevarla a efecto, para la práctica de una liquidación provisional en función de los ingresos estimados susceptibles de obtención y que tendrá el carácter de a cuenta de la liquidación definitiva que se practique, una vez acreditado el importe definitivo de los ingresos obtenidos en el plazo de veinte días a partir de la finalización de la actividad. Esa obligación será igualmente exigible cuando no sea posible la liquidación definitiva en los supuestos de autorización.

El Ministro de Economía y Hacienda determinará, reglamentariamente, el lugar, forma, plazos e impresos para la autoliquidación y el pago de la deuda tributaria, así como los supuestos en que deba realizarse de forma telemática.



9. Gestión.

La gestión, recaudación, liquidación e inspección del impuesto corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.

10. Modificación en la Ley de Presupuestos.

La Ley de Presupuestos podrá modificar la base imponible y los tipos de gravamen del impuesto.

11. Distribución de la recaudación.

La recaudación obtenida por el gravamen de las actividades gravadas que se hayan efectuado mediante sistemas de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, regulados en el artículo 3.h) de esta Ley se distribuirá a las Comunidades Autónomas, en proporción a las cantidades jugadas por los residentes de cada Comunidad Autónoma.

Corresponderá exclusivamente al Estado lo recaudado por el gravamen sobre las apuestas mutuas deportivas o hípcas estatales, incluso si se efectúan mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

La recaudación obtenida por las apuestas deportivas mutuas en el supuesto contemplado en el apartado 7.1 de este artículo, se afecta a las obligaciones establecidas en los apartados b), c) y d) del artículo 1º del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado, aplicándose al presupuesto de ingresos del Estado.

En el presupuesto de gastos del Estado y del Consejo Superior de Deportes se consignarán los correspondientes créditos para atender al pago de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior y de las obligaciones a que se refiere la Disposición Adicional Sexta.

La atribución de ingresos a cada Comunidad Autónoma se determinará en función de la residencia de los jugadores en su ámbito territorial, correspondiéndole, en exclusiva, el incremento de recaudación derivado de la aplicación a tales residentes de lo previsto en el último párrafo del apartado 7 de este artículo.

El importe de la recaudación se pondrá trimestralmente a disposición de las Comunidades Autónomas mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente.

Artículo 49. Tasa por la gestión administrativa del juego.

1. Fuentes normativas.

La tasa por la gestión administrativa del juego se regirá por la presente Ley y por las demás fuentes normativas establecidas por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.





2. Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa:

- a) La emisión de certificaciones registrales
- b) La emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad de sistemas de juego,
- c) Las inscripciones en el Registro General de Licencias y Autorizaciones establecido en esta ley.
- d) La solicitud de licencias y autorizaciones,
- e) Las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica que vengan establecidas, con carácter obligatorio, en esta Ley o en otras disposiciones con rango legal.
- f) Las actuaciones regulatorias sobre las actividades de juego desarrolladas por los operadores de juego, destinadas a sufragar los gastos que se generen por la Comisión Nacional del Juego.

3. Sujetos pasivos

Serán sujetos pasivos de la tasa:

En el supuesto de la letra f) del apartado anterior, los operadores, organizadores y quienes celebren actividades de juego, en los términos previstos en esta Ley.

En los restantes supuestos del apartado anterior, según los casos, la persona que solicite la correspondiente certificación registral, dictamen técnico de evaluación, inscripción en el Registro y tramitación de licencias o autorizaciones, así como a quien sea objeto de las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica.

4. Devengo.

La tasa se devengará:

En el supuesto de la letra f) del apartado 2 de este artículo, el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por causa imputable al sujeto pasivo este perdiera la habilitación para actuar como operador en fecha anterior, la tasa se devengará en el día en que tal circunstancia se produzca.

En los restantes supuestos del apartado 2 de este artículo, con la solicitud de los correspondientes servicios o actividades y, en el caso de la letra f), con la comunicación de las actuaciones inspectoras o de comprobación a que se refiere.

5. Cuantías.

Las cuantías de la tasa serán, para cada supuesto previsto en las distintas letras del apartado 2 de este artículo, las siguientes:

- a).....20 euros.
- b).....38.000 euros.
- c).....2.500 euros.
- d).....por cada licencia 10.000 y por cada autorización 100 euros.
- e)..... 5.000 euros.
- f)..... 1 por mil de los ingresos brutos de explotación.





Las cuantías fijadas en los casos de las letras b) y e) tendrán carácter de mínimas.

Por norma reglamentaria se podrán especificar las cuantías exigibles en función del número de horas y personal necesario para la prestación del servicio o actividad.

En relación con la letra f) anterior, se entiende por ingresos brutos de explotación el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotación de los juegos desarrollados en el ámbito de aplicación de esta Ley exceptuados los derivados de las loterías.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer en su caso anualmente el porcentaje a aplicar sobre los ingresos brutos de explotación que obtenga el operador, tomando en consideración la relación entre los ingresos del cobro de la tasa y los gastos ocasionados por el funcionamiento de la Comisión Nacional del Juego.

Se tomará como objetivo conseguir el equilibrio entre los ingresos por la tasa y los gastos derivados de la citada actividad realizada por el regulador.

No obstante, en caso de ser reducido el porcentaje en la Ley de Presupuestos Generales del Estado al límite del 0,75 por mil del ingreso bruto, el superávit entre ingresos obtenidos y gastos, si lo hubiera, se ingresará por la Comisión Nacional del Juego en el Tesoro Público, en los plazos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, teniendo en cuenta sus necesidades de financiación.

6. Modificación en Ley de Presupuestos.

Las cuantías podrán ser modificadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

7. Liquidación y pago.

La tasa se liquidará por el procedimiento que se apruebe en norma reglamentaria dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

8. Afectación.

El rendimiento de la tasa se ingresará en las cuentas bancarias habilitadas al efecto por la Comisión Nacional del Juego o, en su caso, en el Tesoro Público, en la forma que reglamentariamente se determine.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Reserva de la actividad del juego de Loterías.

Uno. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) son los operadores designados para la comercialización de los juegos de loterías regulados en esta ley.





Dos. Las autorizaciones en virtud de las cuales la ONCE y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado desarrollan las actividades de juego en la modalidad de loterías se inscribirán en una sección especial del Registro General de Licencias y Autorizaciones de Juego a efectos de mera publicidad.

Tres. Excepcionalmente, el titular del Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar la gestión y comercialización de juegos de lotería, siempre que se desarrollen por entidades sin fines lucrativos con finalidad benéfica, tengan carácter esporádico y, en aras a garantizar la seguridad en los procesos y la colaboración con el Estado, acrediten que cumplen con los requisitos, que en su caso, reglamentariamente se establezcan.

Cuatro. Los juegos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE se comercializarán en billetes, boletos o cualquier otra forma de participación cuyo soporte pueda ser material, informático, telemático, telefónico o interactivo, directamente o a través de cualquier establecimiento de su red comercial externa.

Los juegos de loterías gestionados por las entidades a las que se refiere el párrafo anterior no estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el Título III de esta ley.

Cinco. La apertura de establecimientos accesibles al público destinados con carácter principal a la comercialización y desarrollo de los juegos reservados a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, no requerirán autorización de las Comunidades Autónomas.

SEGUNDA. Régimen jurídico específico aplicable a la ONCE en materia de juego.

Uno. El régimen jurídico de la ONCE en materia de juego viene determinado por las disposiciones de esta ley que específicamente resulten de aplicación en su condición de operador designado para la realización de actividades de lotería objeto de reserva, con las especificidades que se contienen en la presente disposición.

Dos. La ONCE, por la singularidad de su naturaleza de Corporación de Derecho Público y de carácter social, y como operador de juego de reconocido prestigio sujeto a un estricto control público, seguirá rigiéndose, respecto de los juegos y modalidades autorizados en cada momento y enmarcados en la reserva de actividad del juego de lotería, por la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, desarrollada por el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE, así como por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de reordenación de la ONCE; por sus vigentes Estatutos; por la presente disposición; por el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre y demás normativa específica aplicable a dicha Organización o que pudiera aprobarse al efecto.

Los títulos por los que se autoriza a la ONCE a realizar actividades de juego no podrán cederse a terceros.

Tres. Con el fin de preservar el estricto control público de la actividad de juego de la ONCE, las competencias que esta ley atribuye a la Comisión Nacional del Juego y al titular del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con las actividades sujetas a reserva, serán





ejercidas en relación con la ONCE por el Consejo del Protectorado, con la salvedad de las competencias que correspondan al Consejo de Ministros.

TERCERA. Asignación financiera a la ONCE y de determinadas Apuestas Deportivas del Estado.

Uno. El Ministerio de Economía y Hacienda asumirá las obligaciones de abono de las asignaciones financieras a favor de la ONCE, que pudieran derivarse de la disposición adicional décimo octava de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Dos. El Ministerio de Economía y Hacienda asumirá las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991 de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se establecerán las entidades beneficiarias de esas asignaciones y los porcentajes de asignación financiera.

CUARTA. Participación autonómica en la aprobación de nuevas modalidades de juego.

La aprobación de las Ordenes Ministeriales que establezcan nuevas modalidades de juego, o la modificación de las existentes, requiere la deliberación y pronunciamiento previo de órganos bilaterales autonómico-estatales, en los casos que así se prevea por los respectivos Estatutos de Autonomía.

QUINTA. Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Las referencias que en esta ley se hacen a las Comunidades Autónomas incluirán, cuando proceda, a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en relación con las competencias que en materia de juego tienen atribuidas.

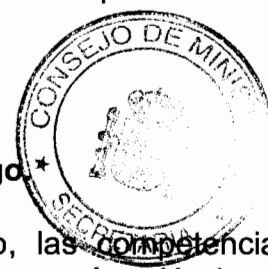
SEXTA. Régimen de participación en la recaudación de las Apuestas Deportivas.

La Ley reguladora del Deporte Profesional fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las Apuestas Deportivas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al Deporte, sin perjuicio de lo previsto en el apartado dos de la Disposición Adicional Tercera. Asimismo, establecerá el régimen de participación y distribución que corresponda.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Inicio de actividades de la Comisión Nacional del Juego.

Hasta la efectiva constitución de la Comisión Nacional del Juego, las competencias previstas para la misma, serán ejercidas por el órgano del Ministerio de Economía y Hacienda





designado por Acuerdo del Consejo de Ministros, incluyendo las relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas a las que se refiere el artículo 49 de esta ley.

El Registro de Prohibidos hasta ahora dependiente del Ministerio del Interior de conformidad con la orden ministerial de 9 de enero de 1979, será gestionado por el órgano administrativo al que se refiere el párrafo anterior hasta su integración en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego.

SEGUNDA. Títulos habilitantes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado podrá seguir comercializando las modalidades y juegos que venía realizando hasta la entrada en vigor de esta ley, de acuerdo con la normativa, las habilitaciones y el régimen de explotación de puntos de venta presencial que se le venían aplicando hasta la entrada en vigor de esta ley.

En el plazo de un año, la Comisión Nacional del Juego transformará las habilitaciones de las que es titular la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado en relación con las apuestas deportivas e hípcas en una licencia general de apuestas, así como en las licencias singulares necesarias para la explotación de las mismas, en los mismos términos y con idéntico alcance a las habilitaciones que regían hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley.

TERCERA. Normativa de los juegos.

La regulación aplicable a los distintos juegos continuará en vigor hasta que sea modificada por los órganos competentes.

CUARTA. Régimen transitorio para los puntos de venta y delegaciones comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

A los puntos de venta de la red comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y sus delegaciones comerciales que, en virtud de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 26/2009, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, no se hubieran acogido al régimen de Derecho Privado en el plazo establecido en el apartado segundo de la citada disposición, les será de aplicación la correspondiente normativa administrativa hasta la extinción de los mismos por concurrir los supuestos previstos en la citada disposición.

QUINTA. Primer mandato de los consejeros de la Comisión Nacional del Juego.

No obstante lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, el primer mandato de tres de los integrantes del Consejo de la Comisión Nacional del Juego durará tres años.

En la primera sesión del Consejo de la Comisión Nacional del Juego se determinará por sorteo, o de forma voluntaria, qué dos consejeros cesarán transcurrido el plazo de tres años desde su nombramiento.





SEXTA. Régimen transitorio de la cesión del impuesto.

1. Las disposiciones de esta norma que supongan territorialización del rendimiento y competencias normativas o gestoras de las Comunidades Autónomas en este impuesto estatal solo serán aplicables cuando se produzcan los acuerdos en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro ordenamiento, y las modificaciones normativas necesarias para su configuración y aplicación plena como tributo cedido.

2. En tanto no se produzcan las modificaciones del sistema de financiación arriba señaladas, el Estado hará llegar a las Comunidades Autónomas, previos los acuerdos en los marcos institucionales competentes, el importe acordado con las Comunidades autónomas, según lo establecido en el apartado 11 del artículo 48 de esta Ley, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 22/2009 relativo a la revisión del fondo de suficiencia global.

El cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior se instrumentará por el mismo procedimiento que el indicado en el apartado 11 de artículo 48 de esta Ley.

SÉPTIMA. Convalidaciones y homologaciones de las Comunidades Autónomas.

Las homologaciones y certificaciones validadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para la concesión de títulos habilitantes de ámbito autonómico con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley surtirán efectos en los procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes regulados en esta ley en los términos recogidos en las convocatorias para la otorgamiento de licencias o cuando así lo establezca la Comisión Nacional del Juego.

OCTAVA. Régimen transitorio de los patrocinios deportivos sobre el juego.

Los patrocinios deportivos de operadores de juegos que hubieran sido acordados en firme con anterioridad al 1 de enero de 2011, podrán seguir desplegando sus efectos en los términos contractuales pactados, hasta la resolución del primer concurso de licencias sobre las actividades de juego objeto del patrocinio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1. Quedan derogadas todas aquellas normas que se opongan a lo preceptuado en esta ley y cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo establecido en la misma.

2. Se derogan expresamente:





1. Real Decreto 28 de febrero de 1924. (Presidencia del Directorio Militar, Gaceta del 29 de febrero)
2. Ley de 16 de julio de 1949, que establece las normas para la celebración de rifas.
3. Decreto 23 de marzo de 1956, aprueba la Instrucción General de Loterías.
4. Orden de 22 de marzo de 1960, por la que se regula con carácter provisional el procedimiento a que ha de ajustarse la solicitud de autorización para celebrar rifas y tómbolas.
5. Decreto 54/1964, de 16 de enero. Organiza el Servicio de Lotería Nacional.
6. Orden de 4 de noviembre de 1965. Nuevas Normas para el pago de premios de la Lotería Nacional.
7. El punto quinto 3 del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas.
8. Disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena de la ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 1986.
9. Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, por el que se establece la clasificación, provisión, funcionamiento, traslado y supresión de las Administraciones de Loterías.
10. Real Decreto 2695/1986, de 19 de diciembre, por el que se establece la composición del Consejo Rector de Apuestas Deportivas del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado
11. Ley 34/1987, Potestad Sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar. No obstante, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla aplicarán esta ley hasta la aprobación, dentro de su ámbito competencial, de la normativa correspondiente a esta materia.
12. Real Decreto 1511/1992, de 11 de diciembre, por el que se regulan determinados aspectos administrativos y económicos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
13. El Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.
14. Disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
15. Artículo 88 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que establece el Régimen sancionador de los titulares de los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado.
16. Orden HAC/430/2004, de 19 de febrero, sobre creación de sucursales de la Red Básica de Loterías y Apuestas del Estado.





17. Real Decreto 176/2005, de 18 de febrero, por el que se regula el Patronato para la provisión de administraciones de Lotería Nacional.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Título competencial.

Esta ley se dicta en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado previstas en la reglas 6ª, 11ª, 13ª 14ª y 21ª del apartado 1, del artículo 149 de la Constitución Española.

SEGUNDA. Facultad de desarrollo.

El Gobierno de la Nación aprobará el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Se autoriza al Gobierno de la Nación a adoptar, a propuesta del titular del Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo e implementación de lo previsto en esta ley.

TERCERA. Extinción de determinados Organismos Públicos.

Quedan extinguidos los siguientes organismos: el Patronato para la provisión de Administraciones de Lotería Nacional, el Consejo Rector de Apuestas Deportivas, ambos adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda, y la Comisión Nacional del Juego, actualmente adscrita al Ministerio del Interior,

CUARTA. Actualización del importe de las sanciones.

La actualización de los importes relativos a las multas previstas en el artículo 42 de esta ley, podrá llevarse a cabo mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda.

QUINTA. Modificación de las tasas sobre el juego.

1. El apartado 1º del artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, quedará redactado de la siguiente forma:

"1º. Constituye el hecho imponible la autorización, celebración u organización de juegos de suerte, envite o azar, salvo que estuvieran sujetas al Impuesto sobre las actividades de juego, establecido en la Ley XX/2010, de de 2010, de Regulación del Juego.





2. El artículo 36 del Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 36. Hecho imponible.

Se exigirán estas tasas por la autorización, celebración u organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, salvo que estuvieran sujetas al Impuesto sobre las actividades de juego, establecido en la Ley XX/2010, de de 2010, Regulación del Juego.

Su exacción corresponderá al Estado cuando el ámbito territorial de participación sea estatal.”

SEXTA. Modificación de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el cual quedará redactado en los siguientes términos:

“1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ente Público RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia de Protección de Datos, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la Comisión Nacional del Juego, se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta ley.

El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía”.

SÉPTIMA. Exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto General Indirecto Canario y referencia a los impuestos directos del Estado.

1. Se modifica el artículo 20.Uno.19º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedará redactado de la siguiente forma:

“19º. Las loterías, apuestas y juegos organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos y, en su caso, por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las actividades que constituyen los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y combinaciones aleatorias.

La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter accesorio o complementario de las incluidas en el párrafo anterior que no constituyan el hecho imponible de los tributos sobre el juego, con excepción de los servicios de gestión del bingo.”





2. Se modifica el artículo 10º.1.19) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen económico Fiscal de Canarias, que quedará redactado de la siguiente forma:

“19º. Las loterías, apuestas y juegos organizados por el Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos y, en su caso, por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las actividades que constituyan los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y combinaciones aleatorias.

La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter accesorio o complementario de las incluidas en el párrafo anterior que no constituyan el hecho imponible de los tributos sobre el juego, con excepción de los servicios de gestión del bingo.”

3. Cualquier referencia a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado contenida en la regulación de los impuestos estatales de carácter directo se entenderá efectuada a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.”

OCTAVA. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Madrid, de de 2011
EL CONSEJO DE MINISTROS, en su reunión del día

acordó remitir a las Cortes Generales el presente proyecto de Ley.
LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO
Y MINISTRA DE ECONOMIA Y HACIENDA

EL MINISTRO SECRETARIO

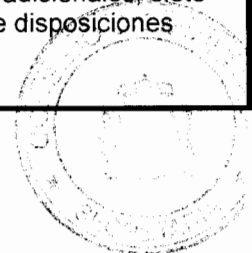
Elena Salgado Méndez



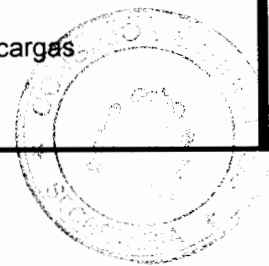
**MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO**

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

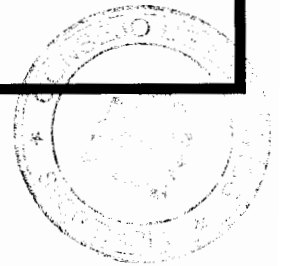
Ministerio/Órgano proponente	Ministerio de Economía y Hacienda	Fecha	03/02/2011
Título de la norma	Anteproyecto de Ley de Regulación del Juego		
Tipo de Memoria	<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Abreviada	
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	Régimen jurídico de las actividades de juego de ámbito estatal.		
Objetivos que se persiguen	Establecimiento del marco regulador de las actividades de juego desarrolladas a través de sistemas electrónicos y Loterías. Protección del orden público, lucha contra el fraude y salvaguarda de los derechos de los participantes.		
Principales alternativas consideradas	Implantación de un modelo de prohibición. Implantación de un modelo monopolístico.		
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO			
Tipo de norma	Ley ordinaria.		
Estructura de la Norma	Siete títulos, cuarenta y nueve artículos, cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.		



Informes recabados	Secretaría General Técnica del Ministerios de Economía y Hacienda. Comisión Nacional de la Competencia. Agencia Española de Protección de Datos. Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Servicios de la Información.	
Tramite de audiencia	A través de la página web "onlae.es", Diciembre 2010-enero 2011.	
ANALISIS DE IMPACTOS		
ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS	Esta disposición se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1. 6º, 11º, 13º, 14º y 21º de la Constitución Española.	
IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO	Efectos sobre la economía en general.	x
	En relación con la competencia	<input type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. <input checked="" type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	<input type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas. Cuantificación estimada: <input checked="" type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas. Cuantificación estimada: 23.500 € <input type="checkbox"/> No afecta a las cargas administrativas.



	<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales.</p>	<p><input type="checkbox"/> Implica un gasto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Implica un ingreso.</p> <p>Cuantificación estimada: millones de €</p> <p>Cuantificación estimada: millones de €</p>
IMPACTO DE GÉNERO	La norma tiene un impacto de género	<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Nulo <input type="checkbox"/> Positivo
OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS	Ninguno.	
OTRAS CONSIDERACIONES	Ninguna.	



ANTEPROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

Esta memoria de análisis de impacto normativo agrupa, con objeto de proporcionar una visión integral que facilite el análisis y la comprensión de la propuesta, los tres informes exigidos por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El informe sobre la necesidad y oportunidad de la norma, la memoria económica y el informe de impacto por razón de género. Los contenidos de la memoria se irán actualizando y completando a medida que avance el proceso de tramitación de la propuesta.

ÍNDICE

I. OPORTUNIDAD DEL ANTEPROYECTO.

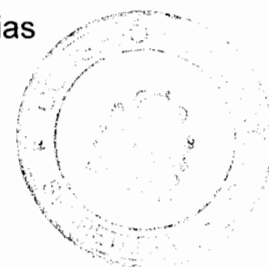
1. Motivación
2. Objetivos
3. Alternativas

II. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.

1. Contenido del anteproyecto
2. Análisis jurídico
3. Descripción de la tramitación

III. ANÁLISIS DE IMPACTOS

1. Adecuación del anteproyecto al orden de distribución de competencias
2. Impacto económico y presupuestario
3. Impacto de género



I. OPORTUNIDAD DEL ANTEPROYECTO.

1. Motivación

La legislación estatal relativa a las actividades de juegos de azar, puede calificarse como obsoleta, dispersa, incompleta y con carencias en su adaptación a la realidad de los tiempos en que vivimos. Durante muchos años, este régimen jurídico ha sufrido muy pocas modificaciones. Recientemente, como consecuencia de la irrupción de actividades de juego a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, que llevan consigo la superación de los límites territoriales existentes en las relaciones comerciales tradicionales, se ha empezado a modificar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual manifiesta la necesidad de establecer una oferta dimensionada del juego. Por tanto, nos encontramos con una situación en la que existen múltiples y diversas actividades de juego que se desarrollan en circunstancias que no cumplen con los deseables principios de seguridad, transparencia, fiabilidad e integridad que deben inspirar y regir las actividades que tienen por objeto la explotación de los servicios de juego.

En la actualidad, no existe ningún sistema de control sobre los servicios de juego desarrollados a través de sistemas interactivos que garanticen unas condiciones de mercado seguras y equitativas para los operadores, ni unos adecuados niveles de protección que salvaguarden los derechos de los participantes en las diferentes modalidades de juego.

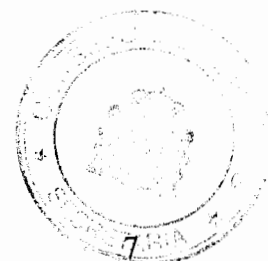
Como consecuencia de la carencia mencionada en el párrafo anterior, el Anteproyecto de Ley que nos ocupa, ha sido ampliamente demandado por diversos colectivos, entre los que destacan los operadores o entidades que gestionan, desarrollan, comercializan y explotan actividades de juego bien por medios presenciales, bien a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, así como los usuarios de este tipo de servicios de

ocio, persiguiendo estos últimos la obtención del mayor grado posible de protección, mediante el cumplimiento de los principios de integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia en las actividades que se oferten en el sector del juego.

De forma paralela, estas actividades al encontrarse en una situación de “ilegalidad” no están sujetas a ningún tipo de tributación o imposición directa, ya que no existe ningún régimen fiscal aplicable sobre estos servicios de juego por sistemas interactivos. En consecuencia, ni la entidad que comercializa y explota la actividad de juego, ni los usuarios de estos servicios tributan de forma alguna por las operaciones que se desarrollan en el sector del juego on-line. La inexistencia de una regulación del juego on-line ha dado lugar a la no tributación de los ingresos que se han generado en este sector del juego.

Esta propuesta normativa se enmarca en el desarrollo de los compromisos recogidos en la Disposición Adicional 20ª de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, donde el Gobierno se compromete a regular las actividades de juego y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas que se desarrollen en el ámbito del Estado y que alcanzó un amplio consenso parlamentario. Estos compromisos, recogidos en la citada Disposición Adicional y respetados por este Anteproyecto de Ley son:

- Asegurar la compatibilidad del Anteproyecto de Ley con la normativa aplicable a otros ámbitos vinculados a la prestación de servicios que regula y, en especial, a la normativa de protección de los menores, de la juventud, de grupos especialmente sensibles de usuarios así como de los consumidores en general, además del ámbito de protección de datos de carácter personal y de servicios de la sociedad de la información.



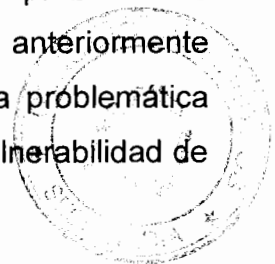
- Establecer una regulación sobre la explotación de actividades de juego por sistemas interactivos de acuerdo con la normativa y los principios generales del derecho comunitario.

- Articular un sistema de control sobre las actividades de juego por sistemas interactivos que garantice unas condiciones de mercado plenamente seguras y equitativas para los operadores habilitados así como unos adecuados niveles de protección de los usuarios.

- Establecer un sistema de tributación sobre las actividades de juego por sistemas interactivos que se desarrollen en el ámbito del Estado. El Anteproyecto de Ley igualmente prevé un sistema de distribución de la tributación obtenida como consecuencia de la explotación de actividades de juego por medios electrónicos en España entre la Administración Estatal y las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la especificidad fiscal de los regímenes forales.

- Establecer un sistema de habilitaciones para la gestión, desarrollo, explotación y comercialización de las actividades de juego a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas, que sólo podrá ejercerse por aquellos operadores habilitados para ello mediante el otorgamiento del título habilitante. Toda actividad incluida en el ámbito del Anteproyecto de Ley que se realice sin el preceptivo título habilitante o incumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en el mismo, tendrá la consideración legal de prohibida.

Por último, en cuanto a la idoneidad del momento actual para la aprobación de esta norma debemos destacar que las motivaciones descritas anteriormente avalan la pronta aprobación de esta normativa, no sólo por la problemática creada por una falta de regulación en esta materia sino por la vulnerabilidad de



los intereses protegidos en la propuesta normativa: menores, dependientes y blanqueo de capitales

2. Objetivos del Anteproyecto.

El objetivo fundamental perseguido con la aprobación de este Anteproyecto de Ley es establecer un marco legal a la actividad de juego de ámbito estatal desarrollada a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales deberán tener un carácter accesorio, respetando las competencias propias de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la distribución constitucional y estatutaria de competencias en materia de juego. A su vez, este marco legal se adapta a los principios generales del derecho comunitario.

Creado este nuevo marco jurídico del sector del juego, se consigue otro de los objetivos perseguidos al proporcionar seguridad jurídica tanto para los operadores públicos y privados como para los usuarios de este tipo de servicios.

Asimismo, se pretende prevenir y mitigar los efectos perjudiciales y negativos que las distintas actividades de juego pudieran provocar en la sociedad, con el fin de proteger la salud pública y haciendo especial hincapié en la protección de los menores de edad, de la juventud y de los grupos especialmente sensibles de usuarios, entre los que se incluyen a las personas que voluntariamente pretendan permanecer alejadas del juego. Otros intereses generales que persigue este Anteproyecto de Ley son la lucha contra el fraude y la prevención de actividades delictivas.

En este sentido, debe destacarse la justificación de la reserva material de la lotería, -recogida en el artículo cuarto del Anteproyecto de Ley-. Esta reserva tiene como fundamento la pretensión de luchar contra el fraude evitando el



blanqueo de capitales que puede llevarse a cabo en estas modalidades de juego. Las especiales características de estas modalidades de juego, esto es, el volumen de juego asociado a estas actividades y la utilización de documentos de pago al portador, siendo la participación de carácter anónima, posibilitan el blanqueo de capitales a través de estas modalidades de juego. Por ello, se requiere y determina la reserva de la explotación de las Loterías a determinados operadores sujetos a un estricto control por parte del ente regulador. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado continuará sometida a un régimen de control público de su actividad dado el gran volumen de juego que gestionado por ésta y su extensa red comercial, de gran raigambre en la sociedad española desde hace más de 250 años.

El Anteproyecto de Ley ha optado, en materia de Loterías, por mantener un modelo que hasta la fecha ha venido garantizando exitosamente el efectivo control de los riesgos inherentes a la venta de estas modalidades de juegos. Existiendo riesgo de una utilización como instrumento en relación con el blanqueo de capitales, no se ha considerado razonable plantearse otras opciones de dudosa eficacia en detrimento de un modelo que ha dado excelentes resultados en lo que se refiere al control de los efectos negativos de este tipo de juegos. Sobre la base de este planteamiento, resulta necesario mantener la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de los operadores de juego que, hasta la fecha, vienen explotando estos juegos de forma satisfactoria y controlada: la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Con el objetivo de asegurar un adecuado control público de las actividades sujetas a reserva y de la gestión que en relación con estas actividades realicen los operadores designados por la ley, el artículo cuatro del Anteproyecto establece el régimen jurídico aplicable a los operadores designados en lo que se refiere a la realización de este tipo de actividades, atribuyéndose al Ministro



de Economía y Hacienda, previo informe de la Comisión Nacional del Juego, la autorización de los juegos de loterías y la fijación de las condiciones de gestión de estos juegos por parte de los operadores designados.

En lo que se refiere a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que desde 1938 se ha consolidado en España como una institución social singular en el objetivo de atención a las personas con discapacidad, sigue manteniendo su singularidad jurídica en materia de juego en las actividades sujetas a reserva, tal y como se establece en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del Anteproyecto.

Finalmente, se encomienda a la Comisión Nacional del Juego el establecimiento de los procedimientos que permitan el seguimiento y control de los operadores que realicen actividades de juego sujetas a reserva y del control del cumplimiento, por parte de éstos, de las condiciones que se establezcan, en especial, en relación con la protección del orden público y la prevención del blanqueo de capitales.

El Anteproyecto de Ley se ha fijado igualmente como objetivo la creación de un régimen fiscal aplicable sobre los servicios de cada una de las diferentes modalidades y tipos de juego. Este nuevo régimen fiscal dará lugar a la obtención de nuevos ingresos públicos al someter a tributación la autorización, celebración, y organización de las diferentes actividades de juego que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de la actividad de juego de las loterías, respecto a las cuales se establece la no sujeción al nuevo impuesto sobre actividades de juego, independientemente del operador, público o privado, que los organice o celebre. Asimismo, también darán lugar a nuevos ingresos públicos las ganancias que puedan obtener los usuarios de estos servicios de juego, que actualmente y dada la situación de ilegalidad, no tributan de forma efectiva.



Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 56/2007, se prevé establecer un sistema de distribución de la tributación obtenida como consecuencia de la explotación de las diferentes modalidades de juego por medios electrónicos en España entre la Administración Estatal y las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la especificidad fiscal de los regímenes forales. Se concreta la participación de las Comunidades Autónomas en el nuevo impuesto sobre actividades de juego mediante la cesión de la recaudación obtenida por el gravamen correspondiente a los ingresos por el juego de los residentes en cada Comunidad, reservándose el Estado lo recaudado por cuenta de los jugadores no residentes en España y la recaudación correspondiente a las apuestas mutuas deportivas estatales y las apuestas mutuas hípcas estatales.

Por último, se pretende organizar un sistema o modelo de control sobre las actividades de juego realizadas por sistemas interactivos que garantice unas condiciones de mercado seguras y equitativas para los operadores de tales sistemas, así como unos adecuados niveles de protección de los usuarios. Por ello, es necesario prever el establecimiento de un adecuado sistema de planificación y de acceso al desarrollo de la actividad, determinar las competencias estatales en materia de regulación y control, así como definir un régimen de infracciones y sanciones que garantice la efectividad del régimen normativo de desarrollo de estas actividades.

3. Alternativas

Este Anteproyecto de Ley de Regulación del Juego opta por un modelo dual de acceso y ejercicio de las actividades de juego. Se justifica esta elección en razones de orden público, lucha contra el blanqueo de capitales, protección de menores y prevención de los fenómenos de dependencia.



En cuanto al acceso y ejercicio de las distintas actividades de juego existen dos posibilidades:

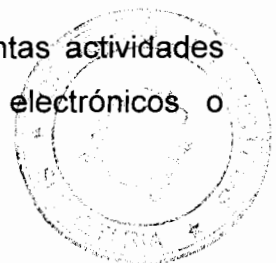
1. Para las actividades de juego definidas como “loterías” y de ámbito estatal, cuya actividad se reserva a favor de los operadores designados por la ley. La designación legal se realiza a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, las cuales ya venían gestionando, comercializando y explotando dicha actividad.
2. Para el resto de actividades de juego de ámbito estatal y de carácter permanente. Para estas actividades se establece un modelo de títulos habilitantes. De conformidad con este anteproyecto son títulos habilitantes las licencias y las autorizaciones.

Las licencias pueden ser:

- Generales, otorgadas a través de concursos públicos en los que rigen los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia, objetividad y no discriminación, a determinado tipo de entidades que gestionen, desarrollen, exploten, y comercialicen actividades de juego de carácter no ocasional.
- Singulares, que se otorgarán para la explotación de cada uno de los tipos de juego incluidos en el ámbito de aplicación de cada licencia general.

Las autorizaciones se otorgarán para la explotación de cualquier actividad de juego objeto de esta Ley que tenga el carácter de ocasional o esporádica.

Estos títulos habilitantes permitirán la explotación de las distintas actividades de juego a través de medios informáticos, telemáticos, electrónicos, o interactivos, además de los medios presenciales.



En relación con el anteriormente descrito modelo propugnado por este Anteproyecto de Ley, basado en la existencia de diversos operadores públicos y privados regulados, supervisados y controlados por un órgano regulador que imponga directrices estrictas y controles sobre las actividades desarrolladas, podemos encontrar otros modelos alternativos:

- Modelo de prohibición, en el que se prohíbe por completo el juego online, mediante el bloqueo de direcciones IP y de transacciones financieras. Este modelo se considera ineficaz, baldío e inoperante dado que, en base a la experiencia de otros países, los jugadores siguen apostando a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos. Esto daría lugar al fomento del mercado negro puesto que los jugadores recurrirían a operadores no controlados quedando indefensos en este modelo.
- Modelo Monopolista. En este caso la regulación del sector del juego determinaría que el Estado autorice a un único operador de juego, en base a que sólo el Estado puede supervisar y controlar adecuadamente el juego online. Este modelo violaría el artículo 49 del Tratado de Roma, en el que se prohíbe toda restricción de los operadores de la Unión Europea que ofrezcan servicios dentro de la Comunidad a los ciudadanos de cualquier Estado miembro (salvo cuando tales restricciones puedan justificarse en razones de interés general reconocidas por la jurisprudencia europea). En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha establecido que las restricciones del juego online sólo pueden ser justificadas por un Estado miembro siempre que tales restricciones sean proporcionadas y coherentes.

Este modelo no parece eficaz ya que el operador autorizado no ofrecería productos y precios tan atractivos como los operadores del sector privado. Esto empujaría a los usuarios a recurrir a operadores de juego en el

extranjero que no están sujetos a los estándares establecidos por el gobierno ni pagan impuestos.

Al margen de los modelos citados anteriormente, se puede hablar de otra alternativa consistente en la inacción, es decir, la no regulación del sector de las actividades de juego de ámbito estatal desarrolladas a través de medios informáticos, telemáticos, electrónicos e interactivos, lo cual sería tremendamente negativo en todos los aspectos estudiados hasta el momento ya que, sin la regulación del sector del juego no se controlaría la actividad de los operadores, ni existiría la seguridad jurídica deseable por operadores y usuarios, y por supuesto no se conseguirían ninguno de los objetivos mencionados anteriormente.

II. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.

1. Contenido del anteproyecto

Este Anteproyecto de Ley se divide en siete títulos, con cuarenta y nueve artículos, cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

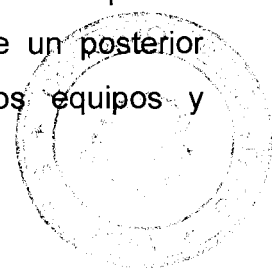
En el Título I, "Objeto y ámbito de aplicación", se regula el objeto y ámbito de aplicación de la ley, tanto desde una perspectiva objetiva (actividad regulada) como territorial, (ámbito de la actividad). De esta forma, el alcance de esta norma se extiende a toda actividad de organización, explotación y desarrollo de actividades de juego de ámbito estatal realizadas a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales tienen carácter accesorio, así como a la actividad publicitaria conectada con la misma, siempre que tales actividades se dirijan a

todo el territorio del Estado, adoptando el criterio de distribución competencial establecido en otras normas sectoriales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información. Asimismo, se incorporan las diferentes definiciones de juegos, incluidos los de carácter esporádico, y se establece la reserva y régimen jurídico específico aplicable a las actividades de loterías.

En el Título II, "Disposiciones Generales", se recogen los requisitos de los juegos, así como las prohibiciones objetivas y subjetivas a las actividades objeto de regulación, previéndose la creación o adecuación de los instrumentos administrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones subjetivas. Igualmente, se regula la publicidad del juego al amparo de las competencias del Estado previstas en el número 6, del apartado primero del artículo 149 de la Constitución Española, singularmente en lo que se refiere a la protección de la juventud y de la infancia, garantizada en el apartado cuarto del artículo 20 de la Constitución Española. Además, se recogen los principios y prácticas a adoptar con objeto de proteger el orden público, garantizando la integridad del juego, así como previniendo y mitigando la participación desordenada en los juegos de azar y los efectos nocivos que pudiere provocar, optimizando simultáneamente los beneficios para la Sociedad

En el Título III, "Títulos Habilitantes", se establecen las características de las diferentes clases de títulos habilitantes, licencias y autorizaciones, y el régimen de autorización aplicable a los operadores como explotadores de juegos, previendo un sistema de adjudicación respetuoso con los principios generales del Derecho Comunitario.

En el Título IV, "Control de la actividad", se establecen los requisitos técnicos mínimos, susceptibles de mayor concreción mediante un posterior desarrollo reglamentario específico, que deberán cumplir los equipos y

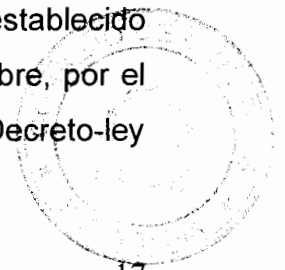


sistemas técnicos que sirvan como soporte de la actividad de juegos autorizados.

En el Título V, “La Administración del Juego”, se establecen las competencias que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda en materia de juego. Se crea un órgano regulador, La Comisión Nacional del Juego, al que se le atribuyen todas las competencias necesarias para velar y asegurar la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego, así como el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones establecidas para su explotación. Además, este órgano regulador único canalizará la demanda dimensionando la oferta de actividades de juego, evitando la explotación de las actividades de juego con fines fraudulentos y estableciendo el marco apropiado para proteger a los menores y prevenir el desarrollo de fenómenos de dependencia. Por último, se establece el Consejo de Políticas de Juego como el órgano de participación de las Comunidades Autónomas.

En el Título VI, “Régimen Sancionador”, se establece el régimen de infracciones y sanciones en relación con las actividades objeto de esta ley, así como el procedimiento sancionador, incluyendo previsiones para poder actuar contra el juego no autorizado a través del bloqueo de la actividad que pueda realizarse a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.

En el Título VII, “Régimen Fiscal”, se determina, de acuerdo con las previsiones establecidas en la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, el régimen impositivo aplicable al desarrollo de las actividades de juego reguladas en esta ley, sin perjuicio del mantenimiento de lo establecido en los artículos 36 y siguientes del Decreto 3059/1966, de 1 diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de Tasas Fiscales y en el Real Decreto-ley



16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, que continuarán en vigor en lo que se refiere al gravamen cedido en su ámbito competencial.

Este nuevo impuesto, en el ámbito estatal, grava las operaciones de juego, así como a las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, aunque no sean estrictamente juego.

Además de lo anterior, se regula la participación de las Comunidades Autónomas en el nuevo impuesto del juego mediante la cesión de la recaudación obtenida por el gravamen correspondiente a los ingresos por el juego de los residentes en cada Comunidad, reservándose el Estado lo recaudado por cuenta de los jugadores no residentes en España y por lo que corresponda a las apuestas mutuas deportivas estatales y las apuestas mutuas hípicas estatales.

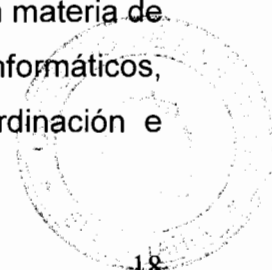
El nuevo impuesto, como se ha dicho, no afecta a las tasas vigentes sobre el juego, siendo incompatible con las mismas, que siguen siendo gravámenes cedidos a las Comunidades Autónomas en su totalidad.

Por último, se establece una tasa fiscal sobre las actividades y servicios prestados a los operadores por la Comisión Nacional del Juego.

2. Análisis jurídico

Se trata de una propuesta con rango de Ley.

Este anteproyecto, que ha de ser la norma sectorial de referencia en materia de explotación de juegos a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos en el ámbito estatal, procura su coordinación e



integración con otras normas sectoriales sobre las que el anteproyecto pueda tener incidencia, tales como la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y demás normativa complementaria, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

En relación con el Derecho comunitario y la jurisprudencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), este Anteproyecto de Ley es compatible con ellos al respetar lo declarado en las distintas sentencias relativas al sector del juego, entre las que destacan:

- Sentencia 9 de septiembre de 2010. Caso Engelmann
- Sentencia 8 de septiembre de 2010. Caso Winner Wetten GMBH
- Sentencia 8 de julio de 2010. Caso Sjöberg y Gerdin
- Sentencia 3 de junio de 2010. Caso Ladbrooks.
- Sentencia 3 de junio de 2010. Caso Betfair.
- Sentencia 8 de septiembre de 2009. Caso Casa da Misericordia.
- Sentencia 13 de noviembre de 2003. Caso Lindman.
- Sentencia 6 de marzo de 2007. Caso Placanica.
- Sentencia 6 de noviembre de 2003. Caso Gambelli.

Estas sentencias se dictaminaron ante la interposición de distintas peticiones de decisiones prejudiciales relacionadas con el sector del juego, en particular con la reserva de la actividad de loterías a favor del Estado y las restricciones a la libertad de establecimiento de negocios relacionados con el juego de nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro.



La jurisprudencia el TJUE ha declarado que la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, recogidos respectivamente en los artículos 49 y 56 del TFUE, han de ser aplicables a los servicios de juegos de azar. No obstante, el TJUE permite modular la efectividad de estos principios al manifestar que el juego también puede implicar ciertas cuestiones de índole moral, religiosa y cultural y un alto riesgo de delincuencia o fraude, que conlleva consecuencias individuales y sociales perniciosas. Por ello, el TJUE considera que las restricciones impuestas por algunos Estados miembros a la entrada de operadores privados en el mercado de loterías y a la actividad de empresas privadas de apuestas y juegos de azar por Internet de otros Estados no vulnera la normativa comunitaria ya que pueden considerarse justificadas si dichas restricciones son necesarias para la protección del consumidor y el mantenimiento del orden público y social. Estas restricciones deben respetar los principios de proporcionalidad y no discriminación.

Por último, destacar que con fecha 4 de febrero de 2011 se cumplió la preceptiva notificación de normas técnicas establecida por la Directiva 98/34/CE.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley establece la derogación de todas aquellas normas que se opongan a lo preceptuado en el mismo y de cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo establecido en él. No obstante, enumera las disposiciones derogadas expresamente, siendo esta derogación expresa consecuencia de la aplicación de la disposición adicional trigésimo cuarta de la Ley 26/2009, o bien de la inaplicación de las mismas.

Las disposiciones derogadas son:

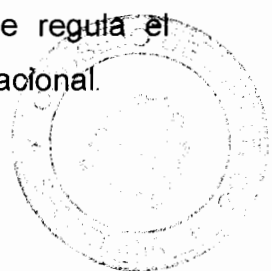
1. Real Decreto 28 de febrero de 1924. (Presidencia del Directorio Militar, Gaceta del 29 de febrero)



2. Ley de 16 de julio de 1949, que establece las normas para la celebración de rifas.
3. Decreto 23 de marzo de 1956, aprueba la Instrucción General de Loterías.
4. Orden de 22 de marzo de 1960, por la que se regula con carácter provisional el procedimiento a que ha de ajustarse la solicitud de autorización para celebrar rifas y tómbolas.
5. Decreto 54/1964, de 16 de enero. Organiza el Servicio de Lotería Nacional.
6. Orden de 4 de noviembre de 1965. Nuevas Normas para el pago de premios de la Lotería Nacional.
7. El punto quinto 3 del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas.
8. Disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 1986.
9. Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, por el que se establece la clasificación, provisión, funcionamiento, traslado y supresión de las Administraciones de Loterías.
10. Real Decreto 2695/1986, de 19 de diciembre, por el que se establece la composición del Consejo Rector de Apuestas Deportivas del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado



11. Ley 34/1987, Potestad Sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar. No obstante, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla aplicarán esta ley hasta la aprobación, dentro de su ámbito competencial, de la normativa correspondiente a esta materia.
12. Real Decreto 1511/1992, de 11 de diciembre, por el que se regulan determinados aspectos administrativos y económicos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
13. El Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.
14. Disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
15. Artículo 88 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que establece el Régimen sancionador de los titulares de los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado.
16. Orden HAC/430/2004, de 19 de febrero, sobre creación de sucursales de la Red Básica de Loterías y Apuestas del Estado.
17. Real Decreto 176/2005, de 18 de febrero, por el que se regula el Patronato para la provisión de administraciones de Lotería Nacional.



3. Descripción de la tramitación

La elaboración del anteproyecto de ley ha contado con un amplísimo grado de participación y consulta, lo que ha motivado que la tramitación administrativa haya sido muy compleja y prolongada en el tiempo.

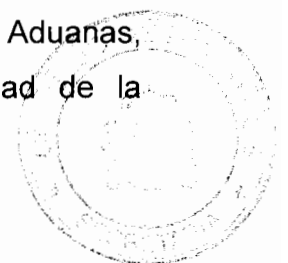
En enero del año 2010, se realizó la presentación de una primera visión general de la futura Ley de Regulación del Juego a las Comunidades Autónomas en la Comisión Sectorial del Juego.

Posteriormente, ya en el mes de julio, se realizó la remisión a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales.

Seguidamente, en el mes de septiembre se realizó una remisión informal a la Secretaría General Técnica y al Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, a la vez que se continuaba en negociación con las Comunidades Autónomas.

En el mes de octubre se presentó el anteproyecto al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al Ministerio de Sanidad y Política Social y al Ministerio del Interior, así como a la Comisión Sectorial del Juego, la Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Sectorial de Política Territorial, la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria y al Grupo de Trabajo de Coordinación Normativa y Fijación de Criterios.

En el mes de noviembre se recibieron observaciones de la mayoría de las Comunidades Autónomas, así como de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Presupuestos, Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Dirección General de Aduanas, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la



Información, observaciones que en su mayoría se tuvieron en cuenta en la elaboración del borrador final del anteproyecto.

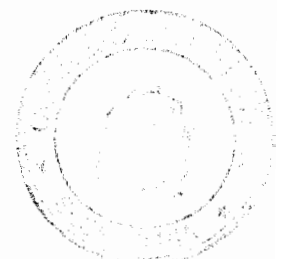
En el mes de diciembre, se solicitó informe a la Comisión Nacional de la Competencia, a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

El anteproyecto fue sometido a un trámite de Audiencia Pública mediante su publicación el 30 de diciembre a través de la página web "onlae.es".

En el mes de enero de 2011, el Anteproyecto de Ley fue remitido formalmente al Ministerio de Economía y Hacienda a efectos de obtener el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica. Igualmente, en este mes fueron recepcionados los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Patrimonio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y del Consejo Superior de Deportes.

Una vez estudiadas las observaciones y alegaciones al anteproyecto, y realizadas las modificaciones del texto de acuerdo con informes recepcionados, el anteproyecto se presenta ante la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

Por último, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999 se notifica el texto legal a la Comisión Europea.



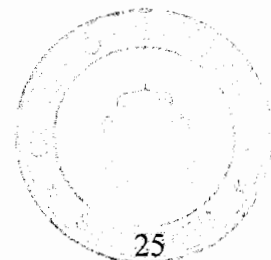
III. ANÁLISIS DE IMPACTOS

1. ADECUACIÓN DEL ANTEPROYECTO AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

1.1 Análisis de los títulos competenciales: Identificación del título prevalente.

El juego, por su complejo carácter como fenómeno sociológico e incluso económico, presenta diversidad de aspectos que pueden situarle en varios títulos competenciales de los establecidos en el artículo 149.1 de la Constitución Española. En sintonía con la afirmación anterior, recogida en el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia número 163/1994, de 26 de mayo, del Tribunal Constitucional, este Anteproyecto de Ley se fundamenta en los apartados 6, 11, 13, 14 y 21 del punto 1 del artículo 149 de la Constitución Española (en adelante CE). Asimismo, el anteproyecto se sustenta en la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, constituida por diversas sentencias, entre las cuales cabe destacar la sentencia número 163/1994, de 26 de mayo, en la que establece la competencia estatal en materia de juego al determinar que el Estado debe ejercerla en nombre del interés general y las sentencias número 216/1994, de 14 de julio, y la número 171/1998, de 23 de julio, en las que se ratifica la competencia del Estado en materia de juego, reconociendo esta última la reserva de la competencia estatal sobre el monopolio fiscal de la Lotería.

Una vez realizado un análisis más pormenorizado del anteproyecto, se puede afirmar que de los cuatro artículos que integran el título I del anteproyecto los tres primeros se fundamenta en el artículo 149.1.6 CE. El artículo cuarto se sustenta en el artículo 149.1.14 CE.



El Título II se sustenta sobre el título competencial recogido en el artículo 149.1.13 CE, a excepción del artículo 8.2, integrado en este Título II, y que encuentra su fundamento competencial en el artículo 149.1.11 CE.

El Título III encuentra su base competencial en los apartados 6, 13 y 14 del artículo 149.1 CE.

El Título IV relativo al control de la actividad del juego se fundamenta en los apartados 6 y 21 del artículo 149.1 CE. Los capítulos I y II del citado título se fundamentan en el apartado 6 y el capítulo III en el apartado 21 del citado artículo de la CE.

El Título V relativo a las competencias de la Administración, a la Comisión Nacional del Juego y al Consejo de Políticas de Juego, se fundamenta en el artículo 149.1.13 y 14.

El Título VI que regula el régimen sancionador encuentra su fundamento competencial en el artículo 149.1. 13 y 14 CE.

Por último, el Título VII que establece un nuevo impuesto para las actividades de juego que se regulan en el anteproyecto y una nueva tasa por las actividades realizadas por el órgano regulador encuentran su fundamento competencial en el artículo 149.1. 14 CE.

Para finalizar este análisis de la competencia estatal en materia de juego, debe citarse el punto 6 de la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre y el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, por la que se regula la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, que establecen la competencia del Estado en relación con la regulación de los juegos de ámbito estatal, todo ello sin perjuicio del



reconocimiento pleno de las competencias en materia de juego que los Estatutos de autonomía atribuyen a las respectivas Comunidades.

1.2 Análisis de las cuestiones competenciales más relevantes que suscita el Anteproyecto.

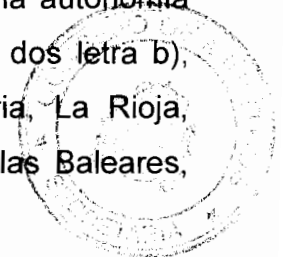
De forma generaliza, cada uno de los Estatutos de Autonomía establece en su articulado la competencia de la Comunidad Autónoma en materia de casinos, juegos y apuestas, con excepción de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.

El Estado no incurre en ningún tipo de conflictos competencial al establecer, mediante este anteproyecto, la regulación de las actividades de juego, en sus distintas modalidades, siempre que se desarrolle en el ámbito territorial estatal y con reconocimiento pleno de las competencias en materia de juego que los Estatutos de autonomía atribuyen a las respectivas Comunidades Autónomas.

1.3. Análisis de la participación autonómica en la elaboración del Anteproyecto.

El Anteproyecto de Ley fue circulado para informe a todas las Comunidades Autónomas habiéndose obtenido respuesta de las siguientes: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Madrid, Extremadura y Ciudad Autónoma de Ceuta.

Diversas Comunidades Autónomas pusieron de manifiesto que el Anteproyecto de Ley propuesto vulneraba o era poco respetuoso con la distribución de competencias establecida en el bloque de constitucionalidad recogido en la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, por la que se regula la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la constitución, donde su artículo dos letra b), transfirió a las Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares,



Madrid y Castilla y León la competencia exclusiva en materia de casinos, juego y apuestas con la exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas. Se proponía modular el alcance de la competencia estatal recogida en el Anteproyecto de Ley teniendo en cuenta las competencias exclusivas en la materia que ostentan las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales.

A estos efectos se tuvieron en cuenta las observaciones de distintas Comunidades Autónomas circunscribiendo el ámbito territorial del anteproyecto al ámbito estatal.

Al margen de las anteriores alegaciones presentadas por las Comunidades Autónomas sobre la competencia del Estado en materia de juego, formularon distintas observaciones al articulado del anteproyecto teniéndose en consideración en el momento de redactar el Anteproyecto de Ley definitivo.

2. Impacto económico y presupuestario

1. Impacto económico general.

El Anteproyecto de Ley tiene, en términos generales, un impacto positivo en la economía española y sus componentes. El establecimiento de la regulación de la actividad de juego de ámbito estatal realizada a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales tendrá un carácter accesorio, fijará el marco legal en el que se encuadrarán los distintos operadores de juego que actuaban sin ningún tipo de cobertura legal hasta el momento. Por ello, se considera que aflorarán las actividades que permanecían ocultas e invisibles en términos económicos, teniendo igualmente efectos favorables para los consumidores ya que se aumentará la oferta de servicios de ocio y, por tanto, aumentará su capacidad de elección entre los distintos servicios ofertados. Igualmente, los derechos de los consumidores se verán especialmente protegidos al pretender este

anteproyecto el cumplimiento de los principios de integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia en las actividades que se oferten en el sector del juego.

En relación con la economía europea, este anteproyecto nos acerca a lo establecido en nuestro entorno europeo sin imponer a las entidades que gestionen, comercialicen y exploten servicios de juego obligaciones distintas a la de sus competidores europeos, favoreciendo la convergencia en las condiciones de prestación de servicios de ocio.

2. Efectos en la competencia en el mercado

Tanto la reserva de la actividad de juego de loterías a determinados operadores, como el establecimiento de un sistema de licencias y autorizaciones previas para desarrollar las actividades de juego no reservadas, suponen una restricción a la competencia ya que limitan el número de operadores que pueden competir en dicho mercado. No obstante, esta limitación obedece a la necesidad de proteger la salud pública, luchar contra el fraude y prevenir las actividades delictivas. Además, esta restricción encuentra otros fundamentos en la protección del consumidor y el mantenimiento del orden público y social.

Por otro lado, y con el objetivo de no mermar la competencia, se prevé que los procedimientos de adjudicación de licencias y autorizaciones no se dilaten excesivamente en el tiempo puesto que no se pretende otorgar ventaja alguna a los operadores ya establecidos en el mercado.

En relación con los costes de entrada en el mercado, estos pueden resultar elevados al exigirse para la obtención de la licencia general del operador la forma jurídica de sociedad anónima, si bien no se exige ningún otro requisito relacionado con elementos de inmovilizado o con el personal contratado,



requisitos que a la larga obligarían al nuevo operador a realizar mayores desembolso o inversiones iniciales para su incorporación al mercado, lo cual podría repercutir en la decisión de entrar o no en el mismo.

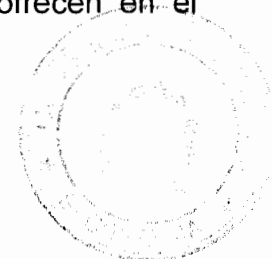
En relación con los costes de salida del mercado, estos no existen, ya que no implicaría inversiones específicas que eleven el coste de cierre de la actividad.

Dado que los costes de entrada y de salida no son elevados, la competencia no se ve afectada.

En relación con la creación de barreras geográficas a la libre circulación de bienes y servicios, este proyecto no crea dichas barreras y en consecuencia no se reduce la variedad de ofertas entre las que pueden elegir los usuarios, y por lo tanto no reduce el tamaño efectivo del mercado posibilitando así la innovación y diferenciación de los productos ofrecidos.

No existe un control sobre los precios de los productos ofrecidos a los usuarios. Únicamente existirá un control, por parte de la Comisión Nacional del Juego, sobre los porcentajes máximos y mínimos destinados al reembolso en concepto de premios en cada modalidad juego

No existen restricciones a la publicidad realizada por operadores que hayan obtenido el título habilitante correspondiente. Tan sólo se requiere la autorización de la publicidad por parte de la Comisión Nacional del Juego. De esta forma, no existen las restricciones a la publicidad y a las estrategias de promoción, las cuales podrían suponer una traba a la capacidad de los operadores de informar a sus clientes o usuarios de su presencia en el mercado y de la naturaleza y calidad de los productos que ofrecen en el mercado.



3. Análisis de las cargas administrativas

3.1 Identificación de las cargas administrativas.

Este Anteproyecto de Ley dará lugar a nuevas tareas administrativas que deben llevar a cabo las empresas y los ciudadanos en cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan. Estas nuevas cargas administrativas son:

- Solicitud y renovación de títulos habilitantes.
- Inscripción, modificación o baja en el Registro correspondiente.
- Solicitud de certificaciones.
- Auditoria, inspecciones y controles.
- Constitución de avales.
- Elaboración de un plan operativo del operador.

3.2. Estimación cuantitativa de las cargas administrativas proyectadas en la norma.

Para proceder a la estimación cuantitativa de las cargas administrativas resulta imprescindible identificar cuatro variables clave: La carga administrativa en sí de que se trate, el coste asignado a esa carga (para lo cual, el Ministerio de la Presidencia incluye en el Anexo V de su Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis del Impacto Normativo una serie de valores referenciales), la población que resulta destinataria de la norma, así como la frecuencia con que deben cumplirse tales obligaciones.

De esta forma se puede realizar la siguiente estimación del importe cuantitativo de las cargas administrativas derivadas del anteproyecto.



CARGAS ADMINISTRATIVAS	COSTE DIRECTO	POBLACIÓN	FRECUENCIA	COSTE UNITARIO
Solicitud de Licencias Generales	110	10	0.0666	73,33 €
Solicitud de Licencias Singulares	85	50	0.0666	531,25 €
Solicitud de Autorizaciones	100	140	1	14.000,00 €
Inscripción de Licencia General	110	5	0.0333	18,33 €
Inscripción de Licencia Singular	110	25	0.125	343,75 €
Solicitud de certificaciones	100	25	1	2.500,00 €
Constitución de garantía	500	10	0.0333	166,67 €
Elaboración de un plan operativo del Operador	500	10	0.0333	166,67 €
Auditoria, inspecciones y controles	1500	5	1	7.500,00 €
TOTAL				25.300,00 €

Los datos de la tabla anterior se explican analizando cada una de las cargas administrativas que se derivan de este anteproyecto y su asimilación a las previstas, de manera tipo, en el Anexo V de la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

1. Solicitud Licencias Generales.

De acuerdo con la tabla de la Guía Metodológica para la elaboración de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, esta carga tendría un importe de 80 €, al que debe sumarse el importe de la carga administrativa de acompañar



documentación a la solicitud, teniendo un valor de 5 € por cada documento que se debe acompañar a dicha solicitud. Esta documentación recogida en el correspondiente reglamento será:

- Escrituras de constitución,
- Declaración jurada de no incurrir en causas de resolución del título habilitante,
- Plan operativo del Operador de Juego, la acreditación de la constitución de la fianza,
- Relación de sistemas, equipos, aplicaciones e instrumentos técnicos empleados para la explotación de la actividad,
- Modelos de anuncios y manifestaciones publicitarias que pretendan realizarse,
- Acreditación de avales

Por tanto, el importe total de la carga administrativa será el resultado de la sumar 80 € (Solicitud presencial) más 30 € (6 documentos que acompañan a la solicitud).

Se estima que el número de empresas afectadas por esta carga administrativa ascenderá a 10.

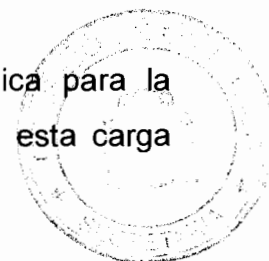
En relación con la frecuencia de esta carga administrativa, debe indicarse que la licencia general tendrá una duración 15 años, pudiendo prorrogarse una sola vez por idéntico periodo. Por tanto, deberá solicitarse 1 vez cada 15 años. En consecuencia el valor que tomará esta variable será de 1/15, es decir, 0.0666.

Por tanto, el coste unitario de esta carga administrativa asciende a:

$$(80+30) \times 10 \times 0.0666 = 73,33 \text{ €}.$$

2. Solicitud de Licencias singulares.

Igualmente, y de acuerdo con la tabla de la Guía Metodológica para la elaboración de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, esta carga



tendría un importe de 80 €, al que debe acumularse el importe de la carga administrativa de acompañar documentación a la solicitud, teniendo un valor de 5 € por cada documento que se debe acompañar a dicha solicitud. Estos serán:

- Acreditación de la titularidad de la Licencia General

La población serán las licencias singulares solicitadas por cada una de las adjudicatarias de las Licencias Generales, pudiendo solicitar las siguientes licencias Singulares:

- Licencia de Apuesta Deportiva mutua,
- Licencia de Apuesta Deportiva de contrapartida,
- Licencia de Apuesta Deportiva cruzada,
- Licencia de Apuesta Hípica mutua,
- Licencia de Apuesta Hípica de contrapartida,
- Licencia de Otras Apuestas Mutuas,
- Licencia de Otras Apuestas de contrapartida,
- Licencia de Rifas,
- Licencia de Concursos,
- Licencia de Otros Juegos.

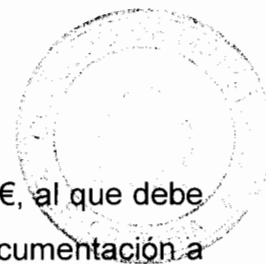
En relación con la frecuencia, las licencias singulares tendrán una duración máxima de ocho años y por tanto el valor que tomará la frecuencia en este será de 1/8, es decir, 0.125.

Por tanto, el coste unitario de esta carga administrativa será de:

$$(80+5) \times (5 \times 10) \times 0.125 = 531,25 \text{ €}.$$

3. Solicitud de Autorizaciones.

Igual que en las anteriores, esta carga tendría un importe de 80 €, al que debe sumarse el importe de la carga administrativa de acompañar documentación a



la solicitud, teniendo un valor de 5 € por cada documento que se debe acompañar a dicha solicitud. Esta documentación recogida en el correspondiente reglamento será:

- N.I.F o escrituras de constitución del solicitante.
- Bases de la actividad de juego.
- Modelos de anuncios y manifestaciones publicitarias que pretendan realizarse,
- Declaración jurada de no incurrir en causas de resolución del título habilitante,

Las autorizaciones serán solicitadas para los casos de actividades de carácter ocasional o esporádico. Teniendo en cuenta los datos en poder de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado correspondientes al año 2010, y considerando que el número de solicitudes será similar al del citado ejercicio, se estima que el número de solicitudes será alrededor de 140.

Las autorizaciones, al poseer el carácter ocasional, tendrán una duración no superior al año, tomando la frecuencia un valor de 1.

Por tanto, el coste unitario de esta carga administrativa será de:

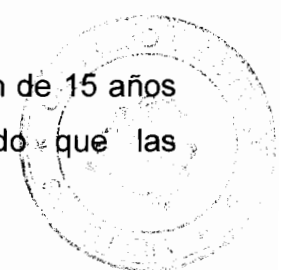
$$(80+20) \times 140 \times 1 = 14.000 \text{ €}$$

4. Inscripción de Licencias Generales en el Registro General de Licencias.

Siguiendo la tabla de la Guía metodológica para la elaboración de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, esta carga administrativa de inscripción en el RGL tiene asignado un importe de 110 €.

Deberán cumplir con la carga administrativa las empresas adjudicatarias de este tipo de licencia. Se estima que pueden ascender a 5.

En cuanto a la frecuencia, al tener la licencia general una duración de 15 años prorrogables únicamente por otros 15 años, y considerando que las



adjudicatarias ejercerán ese derecho, el valor de esta variable sería de 1/30, es decir, 0.333.

Por tanto, el coste unitario de esta carga administrativa será de:

$$110 \times 5 \times 0.0333 = 36,67 \text{ €}$$

5. Inscripción de Licencias Singulares en el Registro General de Licencias.

Siguiendo la tabla de la Guía metodológica para la elaboración de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, esta carga administrativa de inscripción en el RGL tiene asignado un importe de 110 €.

En relación a su población, deberán cumplir con la carga administrativa las empresas adjudicatarias de licencias generales (5) y dependerá del tipo de licencias singulares que soliciten. Se estima que puedan ser una media de 5.

En cuanto a la frecuencia, al tener la licencia general una duración de 15 años prorrogables únicamente por otros 15, y considerando que las adjudicatarias ejercerán ese derecho, el valor de esta variable sería de 1/30, es decir, 0.333

Por tanto, el coste unitario de esta carga administrativa será de:

$$110 \times (5 \times 5) \times 0.33333 = 343,75 \text{ €}$$

6. Solicitud de certificaciones.

Siguiendo la tabla de la Guía metodológica para la elaboración de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, esta carga se considera información a terceros por lo que tendría un importe de 100€. Esta información podrá ser demandada por distintos medios de comunicación o agencias de publicidad para cerciorarse que la entidad que solicita la inserción de anuncios es titular de los títulos habilitantes preceptivos. A efectos de cuantificar la carga administrativa, se estima que la inserción se podrá solicitar por 5 entidades en otros cinco medios de comunicación o agencias de publicidad.

Por tanto, el coste unitario de esta carga administrativa será de:

$$100 \times (5 \times 5) \times 1 = 2.500 \text{ €}$$



7. Constitución de garantía.

Siguiendo la tabla de la Guía metodológica para la elaboración de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, esta carga se asimilaría, en cuanto a contenido y tiempo para su elaboración, a la formalización en documento público, por lo que tendría un importe de 500€. Esta carga debería realizarse por aquellas empresas que opten a la adjudicación de una licencia general, considerándose que participarían en el concurso público unas 10 empresa, siendo la frecuencia de la carga cada 30 años, al considerar que las adjudicatarias de licencias generales ejercerían su derecho de prorroga.

Por tanto, el coste unitario de esta carga administrativa será de:

$$500 \times 10 \times 0.0333 = 166.67 \text{ €}$$

8. Elaboración de un plan operativo del Operador.

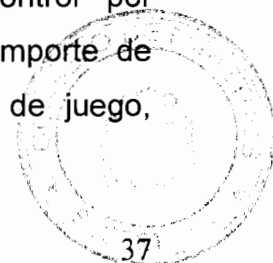
Siguiendo la tabla de la Guía metodológica para la elaboración de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, esta carga se asimilaría, en cuanto a contenido y tiempo para su elaboración, a un informe, por lo que tendría un importe de 500 €. Este plan operativo debería realizarse por aquellas empresas que opten a la adjudicación de una licencia general, considerándose que participarían en el concurso público unas 10 empresa, siendo la frecuencia de la carga cada 30 años, al considerar que las adjudicatarias de licencias generales ejercerían su derecho de prorroga.

Por tanto, el coste unitario de esta carga administrativa será de:

$$500 \times 10 \times 0.0333 = 166,67 \text{ €}$$

9. Realización de inspecciones y controles.

Siguiendo la tabla de la Guía metodológica para la elaboración de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, esta carga se asimilaría, en cuanto a contenido y tiempo para su elaboración, a un control por organizaciones o profesionales externos, por lo que tendría un importe de 1.500 €. Este control debería realizarse sobre los operadores de juego,



estimándose por tanto sobre 5 empresas, siendo la frecuencia de la carga anual.

Por tanto, el coste unitario de esta carga administrativa será de:

$$1.500 \times 5 \times 1 = 7.500 \text{ €}$$

En consecuencia, según el cómputo de las cargas administrativas detectadas en el Anteproyecto, el total estimado de las mismas ascendería a 25.300,00 €

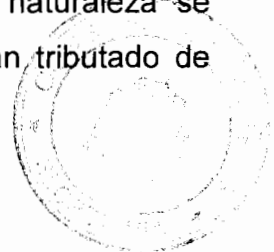
4. Impacto económico y presupuestario.

En relación con los Presupuestos Generales del Estado, estos se verán afectados por el Anteproyecto de Ley dado que el nuevo texto legal crea un órgano regulador, la Comisión Nacional del Juego, y establece un nuevo régimen fiscal recogido en el Título VII del anteproyecto, en el que se crea el impuesto sobre actividades de juego y la tasa de gestión administrativa del juego.

Impacto Tributario.-

Se establece por una parte, un nuevo impuesto que grava los juegos de ámbito estatal, que se delimitan en cuanto al ámbito de aplicación de la Ley, por lo que se excluye toda la tributación respecto a los juegos cuya competencia corresponda a las Comunidades Autónomas. De otro lado, se crea una tasa por la gestión administrativa del juego, por la que se gravan las actividades de esa índole (certificaciones, inscripciones, dictámenes, etc.)

Dentro del ámbito objetivo del impuesto mencionado se gravan, asimismo, las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, que, aunque se excluyen en el Anteproyecto del concepto de juego, su naturaleza se asemeja a los juegos gravados y, además, históricamente, han tributado de

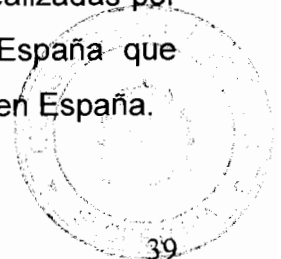


forma conjunta con las rifas y las tómbolas. Como en el caso de las actividades de juego, solamente se gravarán por este tributo si tuvieran ámbito estatal.

El impuesto se califica como tal, de acuerdo con la jurisprudencia sobre las actuales tasas sobre el juego y sobre rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, sobre las que ha considerado que no tienen la condición de tasas, sino que son auténticos impuestos, de forma que se evitan contradicciones entre la denominación y la naturaleza del tributo.

El impuesto, configurado como un tributo estatal, de naturaleza indirecta y denominado "Impuesto sobre actividades de juego", se estructura mediante los siguientes elementos tributarios:

- Hecho imponible: Se gravan la autorización, celebración u organización de:
 - a) Las actividades de juego de loterías, apuestas y otras cualesquiera, en las que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma, sobre resultados futuros e inciertos, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar.
 - b) Las rifas y concursos, en los que la participación se realiza mediante una contraprestación económica.
 - c) Los juegos de carácter ocasional, que se diferencian del resto de los juegos previstos en los apartados anteriores por su carácter esporádico.
 - d) Las actividades de juego transfronterizas, esto es, las realizadas por las personas físicas o jurídicas radicadas fuera de España que organicen u ofrezcan actividades de juegos a residentes en España.



e) Las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales.

Se declaran no sujetos al impuesto los juegos de lotería de ámbito estatal, dadas las finalidades de interés general que tienen en nuestro país las loterías organizadas tanto por el Estado, como por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

- Sujetos pasivos a título de contribuyentes: Se designa como tales a quienes operen, organicen o desarrollen las actividades gravadas, incluidas las entidades sin personalidad jurídica propia reguladas en el artículo 35 de la Ley General Tributaria, tales como comunidades de bienes y otras que puedan intervenir en este sector.
- Responsables solidarios: Se declaran solidariamente responsables del tributo, además de los contribuyentes, a los dueños o empresarios de las infraestructuras en que se celebren, los medios de comunicación a través de los que se difundan, los medios publicitarios y cualquier entidad que publicite de cualquier forma estas actividades, cuando no hubieran constatado que se celebran u organizan con los necesarios títulos habilitantes o comunicaciones.

Sin embargo, para evitar cualquier indefensión de los responsables, se implementa la posibilidad de que puedan solicitar a la Comisión Nacional del Juego la información necesaria para saber si una determinada actividad está o no legalizada en nuestro país. Esta extensión de la responsabilidad dificultará la realización, organización o celebración de este tipo de actividades cuando no se cuente con los títulos habilitantes que permitan su control en España.



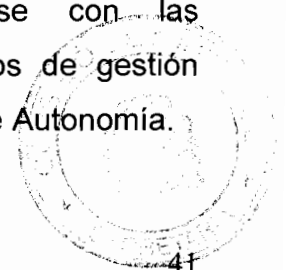
Se trata, en definitiva, de acabar con el juego ilegal y de las posibles ayudas a este tipo de operadores sin habilitación para operar en nuestro país.

- Base imponible: Se establecen como bases imponibles, según el tipo de juego, el total de los ingresos brutos de las operadoras del sector o el ingreso neto de premios, además, para las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales se establece el valor de mercado de los premios en especie ofrecidos.
- Tipos: Los tipos del impuesto se establecen en función del tipo de juego de que se trate, con efectos recaudatorios similares a los ya existentes en la normativa sobre tasas sobre Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas y sobre Rifas, Tómbolas y Combinaciones aleatorias, para evitar la discriminación de unos juegos respecto de otros y de unos canales de distribución virtuales sobre los presenciales.

En el sentido anterior, se han fijado en un 20 por ciento los tipos de las rifas y concursos, por ser aproximadamente la media de los tipos exigidos actualmente por las Comunidades Autónomas.

En este punto, dado que las Comunidades Autónomas son también beneficiarias de lo recaudado por este tributo, se establece que puedan, para los residentes en sus territorios, elevar los tipos fijados en hasta un 20 % del porcentaje fijado en esta Ley, incremento cuya recaudación les corresponderá de forma íntegra.

- Gestión: La gestión se encomienda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aunque podrá concertarse con las Comunidades Autónomas, que así lo soliciten, acuerdos de gestión compartida, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos de Autonomía.

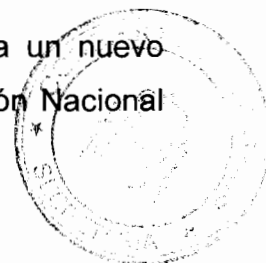


- Modificación: Se prevé que la Ley de Presupuestos Generales del Estado puedan modificar algunos de los elementos de este impuesto, en concreto, la base imponible y los tipos de gravamen del impuesto.
- Distribución de la recaudación: En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, la recaudación de este tributo se distribuye entre el Estado y las Comunidades Autónomas, para las que los ingresos por este tributo, en ningún caso minorarán los derivados de la aplicación del actual sistema de financiación establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Como se ha dicho, lo recaudado por el aumento de tipos autonómicos corresponderá, exclusivamente, a la Comunidad Autónoma proponente.

La implantación de este nuevo impuesto, se completa, para evitar cualquier problema de delimitación con las vigentes tasas, con la modificación del hecho imponible de estas, aunque el nuevo tributo solamente se aplica a las actividades de ámbito estatal.

Es de todo punto imposible, dada la situación actual del sector del juego, especialmente por lo que atañe al juego por medios telemáticos de todo tipo, hacer una estimación realista, basada en datos contrastados, de la recaudación esperada.

Por otro lado, el artículo cuarenta y nueve del anteproyecto crea un nuevo tributo, la *"tasa por la gestión administrativa del juego"*. La Comisión Nacional



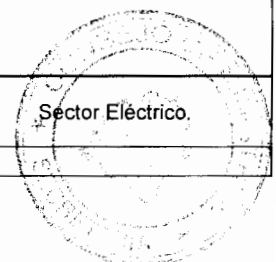
del Juego en el ejercicio de sus funciones regulatorias, presta diversos servicios a las distintas entidades que gestionen, desarrollen, comercialicen y exploten las actividades de juego de ámbito estatal y que engloba las funciones de regulación, supervisión, inspección y, en su caso sanción. Por la prestación de actuaciones regulatorias, el órgano regulador obtiene ingresos, recursos, cuya recaudación se aplicará al presupuesto de ingresos de la Comisión Nacional del Juego.

La estimación del ingreso que puede derivarse de la liquidación de la citada tasa, teniendo en cuenta los datos obtenidos de los distintos operadores de juego correspondientes al ejercicio 2009, sería:

- Base Imponible: 10.444.566.070 €
(Ingresos brutos de explotación de los operadores)
 - LAE..... 9.844.566.070 €
 - Otros Operadores (Estimación)..... 600.000.000 €
- Tipo de gravamen..... 0.001
- Cuota..... 10.444.566 €

Con el fin de dimensionar correctamente el importe de la “tasa por la gestión administrativa del juego” dentro del marco de los órganos reguladores, se muestra a continuación un cuadro que recoge los ingresos obtenidos por órganos reguladores de otros sectores a través de este tipo de tasa.

Órgano Regulador	Ingresos por tasa de operadores	Tipo de gravamen aplicado.	
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones	33.900.000 €	0.002	
Comisión Nacional de la Energía	29.529.759 €	0.00201	Sector Eléctrico.



		0.00166	Sector Hidrocarburos gaseosos.
		0.140817€/Tm	Sector Hidrocarburos líquidos.
Comisión Nacional del Sector Postal	-----	0.001881	

Por el resto de prestaciones recogidas en el artículo 49.2 del anteproyecto se estiman los siguientes ingresos:

Emisión de certificaciones registrales..... (nº operadores (5) x medios de publicidad (30) x 20€)	3.000 €
Emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad de sistemas de juego..... (nº operadores (5) x 38.000 €)	190.000 €
Inscripciones en el Registro General de Licencias (nº inscripciones (5+25) x 2500 €)	75.000 €
La tramitación de licencias y autorizaciones..... (nº de solicitudes (5+25) x 10.000 €) (nº de solicitudes (135) x 100 €)	313.500 €
Las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica..... (nº de actuaciones (20) x 15.000 €)	<u>300.000 €</u>
TOTAL	881.500 €

En resumen, las estimaciones de ingresos por el conjunto de servicios prestados por la Comisión Nacional del Juego a los que hace referencia el artículo 49 del anteproyecto ascienden a la cantidad de 11.326.066,00 €.

En vista de lo expuesto la creación de la Comisión Nacional del Juego no debe dar lugar a incremento del gasto público presupuestario.



Impacto Presupuestario.-

La actual entidad pública empresarial de Loterías y Apuestas del Estado es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Este organismo viene desarrollando tanto funciones propias de un operador de juego, como son la gestión, desarrollo, comercialización y explotación de actividades de juego, así como funciones propias de un órgano regulador, como son el otorgamiento de autorizaciones de distintas modalidades de juego. Estos dos ámbitos de actuación del organismo público han sido disociados. Esta disociación se llevó a cabo mediante la disposición adicional cuadragésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, relativa a la reordenación e la actividad de Loterías y Apuestas del Estado que determinó la creación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, (operador de juego) y mediante este anteproyecto que determina la creación de la Comisión Nacional del Juego, órgano regulador del sector del juego.

En relación con el impacto presupuestario, el presente Anteproyecto de Ley, no conlleva la modificación de ninguna de las partidas de gasto del presupuesto del Estado. La incidencia que tendrá el citado anteproyecto, desde el punto de vista del gasto público, debe considerarse nula, dado que las medidas que deben adoptarse para dar cumplimiento a lo previsto en el presente anteproyecto deben ser asumidas con los recursos tanto técnicos como humanos con los que la administración cuenta en la actualidad, sin necesidad de ningún tipo de incremento en las consignaciones presupuestarias.

Por tanto, el impacto presupuestario de la creación de la Comisión Nacional del Juego será nulo, no implicará incremento de gasto público dado que se constituirá con los recursos materiales y humanos que formaban parte de la entidad pública empresarial de Loterías y Apuestas del Estado.



5. Impacto presupuestario en las Comunidades Autónomas.

El impuesto creado en el artículo 48 del Anteproyecto de Ley se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas en el 100 % del total recaudado por nuevo impuesto de las actividades de juego, excluyendo lo recaudado en las Apuestas Mutuas Deportivas Estatales y las Apuestas Mutuas Hípicas Estatales.

El sistema de atribución de los ingresos a las distintas CCAA está en función de la cuantía jugada en cada Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta el domicilio fiscal de las personas que realicen actividades de juego a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos.

Las CCAA pueden elevar el tipo impositivo hasta en un 20% del general aplicado. Esta parte de la recaudación, correspondiente a los jugadores con domicilio fiscal en el territorio de una Comunidad Autónoma que haya elevado el tipo del impuesto, corresponderá íntegramente a dicha Comunidad.

3. Impacto de género

A los efectos de lo previsto en la letra b), apartado primero del artículo 24, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, se señala que el Anteproyecto tiene un impacto de género nulo, en la medida en que su contenido no incluye ningún tipo de medida que pueda atentar contra la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.





REF.:

REF.C.M.:

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO.

El proyecto de Ley de Regulación del Juego establece el marco legal de la actividad de juego de ámbito estatal desarrollada a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, respetando las competencias propias de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la distribución constitucional y estatutaria de competencias en materia de juego y adaptándose, a su vez, a los principios generales del Derecho comunitario.

Dicho proyecto regula toda actividad de organización, explotación y desarrollo de juegos de azar de ámbito estatal a través de cualquier medio o soporte, sometiendo su funcionamiento a la obtención previa de un título habilitante, condicionada al obligado respeto por parte de los operadores de una serie de condiciones, orientadas, por una parte, a garantizar la protección de los usuarios, y, por otra, a vetar la participación en este tipo de actividades a los menores de edad y a las personas que voluntariamente lo hubieran solicitado. Por tanto se consigue proporcionar seguridad jurídica, tanto para los operadores públicos y privados, como para los usuarios de este tipo de servicios.

El modelo adoptado establece la reserva de las modalidades de juego definidas como loterías y de ámbito estatal a favor de los operadores designados por la ley: la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, las cuales ya venían gestionando, comercializando y explotando dicha actividad. Para el resto de modalidades de juego de ámbito estatal y de carácter permanente, se establece un modelo de títulos habilitantes o licencias y autorizaciones. Se prevé en consecuencia la existencia de diversos operadores públicos y privados regulados, supervisados y controlados por un órgano regulador que imponga directrices estrictas y controles sobre las actividades desarrolladas.

El citado órgano regulador será la Comisión Nacional del Juego, que se encargará de la supervisión del cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, de la concesión de licencias y autorizaciones, de garantizar el correcto funcionamiento del sector del juego y de la normativa vigente, asimismo le corresponderá la aplicación del régimen de infracciones y sanciones que establece el proyecto normativo. También existirá la Comisión de Políticas de Juego como órgano colegiado que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.



El presente proyecto de Ley establece, además, un régimen fiscal específico para las actividades objeto de regulación, que gravará la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de la actividad de juego de las loterías, que no estará sujeto al nuevo Impuesto sobre Actividades de Juego. Además, la totalidad de los ingresos de las actividades de juego online será destinado a las Comunidades Autónomas.

En el ámbito europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha optado claramente por que se de coherencia a los sistemas regulatorios de juego en la Unión Europea, estimando que un sistema de licencias como el que prevé este proyecto de Ley es más compatible con los principios de Derecho Comunitario. Esto ha llevado a que los países de la Unión Europea de nuestro entorno (Francia, Italia, Dinamarca, Bélgica, Polonia o Rumania, entre otros) hayan procedido a la tramitación de Leyes del Juego que, en el sentido apuntado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, regulan un sistema de licencias para el desarrollo de determinadas actividades de juego.

Por otra parte, el incremento exponencial de una oferta ilegal de servicios de juego a través de medios electrónicos y telemáticos, especialmente a través de Internet, hace que se deban de adoptar, cuanto antes, las medidas legislativas necesarias para proteger a los menores, consumidores, dependientes de juego así como evitar conductas atentatorias contra el orden público, especialmente en relación con el blanqueo de capitales. El proyecto de Ley establece medidas eficaces para luchar contra el juego ilegal que deben ser puestas en marcha con la mayor celeridad a efectos de reducir el impacto negativo que el fenómeno de juego on line está produciendo en los colectivos anteriormente mencionados.

Además, la actividad desarrollada por operadores ilegales de juego, generalmente radicados en paraísos fiscales de fuera de la Unión Europea, está provocando un perjuicio económico a la tradicional industria española del juego que incrementa los efectos ya de por si negativos de la crisis económica en la que estamos inmersos. Por ello, la nueva Ley al reordenar el sector del juego y expulsar del mercado español a todos aquellos operadores que no cumplan con los requerimientos regulatorios contenidos en el mismo, favorecerá el legítimo ejercicio de la actividad de las empresas de juego, la transparencia del mercado y la competencia leal.

En consecuencia, la imperiosa necesidad de establecer un marco normativo del juego de ámbito estatal, especialmente desarrollado a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos adaptado a la situación europea, además de la protección de los intereses de menores, consumidores, dependientes del juego, así como la persecución del blanqueo de capitales y el incremento de los ingresos de la Hacienda Pública, hace necesario la tramitación a la mayor brevedad posible del Proyecto de Ley objeto del presente Acuerdo.



En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, en su reunión de

ACUERDA

Solicitar a la Mesa del Congreso de los Diputados la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Regulación del Juego, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Dado en Madrid

ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS

LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y
MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Elena Salgado Méndez

EL CONSEJO DE MINISTROS
aprobó la presente
propuesta en su reunión
del día - 4 FEB. 2011

EL MINISTRO SECRETARIO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el
documento que antecede, compuesto de
3 pag. es copia fiel del original que obra
en el Archivo del Secretariado del
Gobierno.

Madrid, - 4 FEB. 2011

LA DIRECTORA DE LA OFICINA